

Trabajo Fin de Grado

Los administradores de una sociedad:
responsabilidad de los administradores

Autor/es

Pablo Alejandro Gracia Muñoz

Director/es

Anunciación Pérez Pueyo

Facultad de Economía y Empresa
Año 2015

Información y resumen

Los administradores de una sociedad: responsabilidad de los administradores. Grado en Administración y dirección de empresas.

Autor: Pablo Alejandro Gracia Muñoz

Director: Anunciación Pérez Pueyo

El órgano de administración es uno de los dos órganos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad de una sociedad. Es importante conocer cada uno de sus aspectos fundamentales, desde el nombramiento al cese, pasando por todos los deberes y la responsabilidad que de su incumplimiento resulta así como también las posibles acciones que pueden interponerse para resarcir los daños que un comportamiento contrario a la Ley podría producir. No debemos olvidar tampoco las diversas formas organizativas que pueden existir y las diferentes atribuciones de responsabilidad que de sus acciones o decisiones puedan derivar.

Es relevante profundizar desde los conceptos generales de administración y responsabilidad hacia lo más concreto, su aplicación directa a la sociedad de capital. Es objeto de este trabajo la representación de la sociedad, como aspecto fundamental así como las mejoras en la identificación de los responsables surgidas de la Ley 31/2014. La existencia de los seguros de responsabilidad civil puede proporcionar ayuda a la cobertura de los riesgos asociados al ejercicio y desempeño de este cargo.

Abstract

Administrators of a company: administrators responsibility. Business Administration and Management degree.

Author : Pablo Alejandro Gracia Muñoz

Director: Anunciación Perez Pueyo

The board is one of the two bodies necessary for the proper development of the activity of a society. It is important to know each one of its fundamental aspects, from appointment to dismissal, through all the duties and responsibility of its failure results as well as possible actions that may be brought to compensate the damages that conduct contrary to the law may produce. We shouldn't forget the various organizational forms that can exist and the different claims of responsibility for their actions or decisions may arise.

It is important to deepen from the general concepts of management and responsibility to the more concrete, direct application to society. The representation of society as a fundamental aspect as well as improvements in identifying responsibility arising from the Law 31/2014. The existence of civil liability insurance can provide assistance to cover risks associated with the exercise and performance of this office.

ÍNDICE

ÍNDICE DE ABREVIATURAS	4
1. INTRODUCCIÓN	5
2. ADMINISTRADORES Y RESPONSABILIDAD	6
2.1 CONCEPTO Y FUNCIONES	6
2.2 RESPONSABILIDAD	7
3. LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL.....	11
3.1 NOMBRAMIENTO, DURACIÓN Y CESE	12
3.2 FUNCIONES Y COMPETENCIAS. DEBERES	19
3.3 REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD	28
3.4 LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES	32
4. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL ¿QUIÉNES RESPONDEN?	36
4.1 EL ADMINISTRADOR DE HECHO.....	36
4.2 EL ADMINISTRADOR OCULTO	37
4.3 LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR OBLIGACIONES SOCIALES.	38
4.4 LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES EN EL ÁMBITO CONTABLE	40
4.5 EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES DE CAPITAL	42
4.6 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD.....	45
4.6.1 Acción social de responsabilidad: Ejercicio por la sociedad	45
4.6.2 Acción individual de responsabilidad	46
5. CONCLUSIONES	49
6. BIBLIOGRAFÍA.....	51
7. ANEXO.....	55

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Cc: Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889).

Ccom: Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885).

LC: Ley Concursal (Ley 22/2003 de 9 de julio)

LCS: Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/1980 de 8 de octubre).

LMV: Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988 de 28 de julio).

LSA: Ley de Sociedades Anónimas (texto refundido) (Real decreto 1564/1989 de 22 de diciembre **DEROGADA**).

LSC: Ley de Sociedades de Capital (referencia al Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el TRLSC).

RM: Registro Mercantil.

RRM: Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio).

SA: Sociedad Anónima.

SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TRLSC: Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio).

1. INTRODUCCIÓN

Un graduado en Administración y Dirección de Empresas no debería finalizar su formación sin conocer de forma clara uno de los campos en los que es probable que desarrolle su labor: la administración de una sociedad. Considerando este punto tan relevante y poco tratado a lo largo de la formación académica ya que se ven los conceptos generales en el primer curso en tres lecciones del temario de Introducción al Derecho y se desarrolla algo más en una asignatura optativa de cuarto curso (Derecho mercantil) de GADE (aunque sólo en 2 lecciones y muy por encima), es muy interesante el estudio más detallado de los conceptos de administración y responsabilidad así como también las principales funciones que conlleva la tarea de la administración, los deberes propios de su cargo, la duración del mismo, el cese, la responsabilidad,...

Para el correcto desempeño del cargo de administrador, es necesario conocer el alcance de su responsabilidad. La responsabilidad que se derivará de su actuación, de aquellas actividades y funciones que el administrador lleva a cabo en la sociedad. Es muy interesante estudiar el alcance de esta responsabilidad puesto que en todo momento se debe ser consciente de ella ya que puede tener unas consecuencias muy graves para quien sea responsable.

Hallando numerosa legislación específica así como también comentarios de diversos autores expertos en la materia, el principal objetivo es un trabajo sintetizando la información encontrada y tratando de exponer de forma concisa lo más relevante en relación a los administradores. En este estudio se tratará de enlazar los conceptos jurídicos que en la Ley aparecen con el objetivo básico del desarrollo de este trabajo: complementar la necesidad informativa sobre el desarrollo de este cargo de responsabilidad en una sociedad por un futuro graduado en ADE.

El estudio se basa en una exposición de conceptos inicial que posteriormente se detalla en aquellos apartados que considero menos desarrollados por la formación recibida tanto en la Licenciatura como en el nuevo Grado. El objetivo básico que considero, por tanto, es el desarrollo conjunto en un trabajo de información que pueda considerarse relevante como introducción al tema de los administradores, siendo siempre interesante

consultar la información concreta de la bibliografía, pues comenta y amplía los numerosos casos que nos podemos encontrar en la actividad empresarial.

2. ADMINISTRADORES Y RESPONSABILIDAD

2.1 CONCEPTO Y FUNCIONES

Para comenzar un estudio sobre la responsabilidad de los administradores necesitaremos explicar el significado en sí mismo de los conceptos básicos sobre los que se desarrollará nuestro estudio: administración y responsabilidad.

Para entender el concepto de administrador, podemos referirnos a diferentes fuentes, como es la definición básica y concisa que proporciona la Real Academia Española: “persona que administra bienes ajenos”¹. Ampliando y detallando algo más el concepto y en referencia especial a las sociedades, se pueden citar las siguientes definiciones fijadas por la doctrina mercantilista: “los administradores son el órgano ejecutivo encargado de la gestión de la sociedad y de representarla en sus relaciones con terceros”², específicamente para los administradores de las Sociedades Anónimas (en adelante SA): “la organización o estructura organizativa en su esencia, para toda entidad subjetivada y que como tal mantiene relaciones externas, es el conjunto de elementos estructurales justificados por la naturaleza técnico-jurídica de la entidad –llamados órganos- dispuestos en el régimen legal o del acto constitutivo para el desarrollo de la actividad social”³.

Una vez detallado el concepto de administrador, vamos a referirnos a las funciones que debería desempeñar. Antes de entrar en detalle sobre las funciones a desempeñar en las sociedades de capital, que se comentará más adelante en el capítulo los administradores

¹ <http://lema.rae.es/drae/?val=administrador>

² AAVV (MENÉNDEZ, A; ROJO, A. directores) (2014): *Lecciones de Derecho mercantil*, vol. I. Ed. Civitas, Navarra. p. 497.

³ Voz “Administradores de S. A.”, AAVV (MONTROYA MELGAR, A. director), *Enciclopedia Jurídica Básica*, t. I, pp. 342-343.

de las sociedades de capital, quizá lo más relevante sería destacar el papel principal para el que un administrador es nombrado. ¿Por qué debe nombrarse un administrador en una sociedad?

Las sociedades, como personas jurídicas, necesitarán de una representación para poder llevar a cabo su operativa. Esta figura del administrador aparece, por tanto, como figura obligatoria marcada por Ley, en concreto en el artículo 209 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital⁴ (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante TRLSC). Es importante destacar que al conferir poder de representación de la sociedad a los administradores, todos los actos realizados por ellos siempre y cuando se lleven a cabo dentro del ámbito de actuación que la sociedad les ha conferido, se consideran realizados por la sociedad⁵.

En el epígrafe 2 de este trabajo, titulado Los administradores de las sociedades de capital, se desarrollará con más detalle el nombramiento, las competencias y representación de los administradores.

2.2 RESPONSABILIDAD

En un primer acercamiento al concepto de responsabilidad, explicando la responsabilidad en derecho mediante la definición que la Real Academia Española ha proporcionado como “capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”⁶, entendemos entonces que de los actos realizados por los administradores en su ejercicio de representación, se podrán derivar determinadas consecuencias. En concreto, basándonos en el Art. 1902 del Código Civil⁷ (en adelante Cc), existe la reparación obligatoria del daño causado a otro si existe culpa o negligencia.

⁴ “Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley”.

⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores en las sociedades de capital*. Ed. Aranzadi, SA, Navarra, pp. 228-230.

⁶ <http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad>

⁷ “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

Más en concreto referida la responsabilidad a aquella que tienen los administradores por el desarrollo del ejercicio que conlleva su cargo, la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante LSA) parte de un doble supuesto de responsabilidad: por daños causados al patrimonio de la sociedad, exigible por la propia sociedad y por daños causados directamente en el patrimonio particular de socios o terceros”⁸. Aunque esta definición se refiere a la antigua LSA, nos sirve para hacernos una idea del concepto de responsabilidad y sobre lo que el administrador puede responder. Es interesante en este punto remitirse a la definición de responsable civil para terminar de comprender el concepto: “el responsable civil es la persona contra la que se dirige el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, es decir, la persona que, en su caso, deberá hacer frente a la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios (art. 101 CP)”⁹.

En el estudio de la responsabilidad, debemos referirnos a los tipos de responsabilidad que pueden existir: en primer lugar hay que diferenciar entre la responsabilidad contractual y la extracontractual.

A partir de la Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS) de 24 de julio de 1969¹⁰, podemos considerar que la responsabilidad contractual es aquella que existe si entre las partes hubiese un contrato o relación contractual, la responsabilidad, por tanto, se derivaría únicamente del incumplimiento parcial o total de lo que se hubiera pactado en el contrato. Además la STS de 16 de diciembre de 1986 refuerza que la responsabilidad contractual será únicamente considerada si el incumplimiento se deriva de algún término rigurosamente incluido dentro de lo pactado en el contrato.

La responsabilidad extracontractual será aquella producida cuando con independencia de lo pactado o cuando no existiera relación alguna entre las partes, se produce daño por cualquier otro motivo contrario a la Ley. Para explicarlo mejor, la responsabilidad proviene de una obligación nacida por culpa o negligencia (ya citado Art. 1902 Cc). No

⁸ Voz “Responsabilidad civil de los administradores.”, AAVV (MONTROYA MELGAR, A. director), Enciclopedia Jurídica Básica, t. III, P. 5912.

⁹ Voz “Responsable Civil”, AAVV (MONTROYA MELGAR, A. director), Enciclopedia Jurídica Básica, t. III, p. 5966.

¹⁰ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, R. (2013): “Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas”. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, Nº. 46, p. 205.

deberá haber ningún contrato previo o, al menos, el daño causado no deberá proceder o ser consecuencia de él¹¹.

Siguiendo a González Hernández¹², con fundamento en sentencias posteriores ha quedado clara la dificultad, en ocasiones, de determinar el tipo de responsabilidad producido por un hecho concreto, como declara la STS de 19 de julio de 2005. No obstante, en la STS de 19 de diciembre de 2008 queda determinado que para que exista responsabilidad extracontractual se “requiere la concurrencia de los tres elementos descritos en el artículo 1902, es decir, negligencia, daño y relación de causalidad”.

Atendiendo a su alcance, podemos también diferenciar entre responsabilidad: limitada e ilimitada. La base de la responsabilidad limitada en el ámbito de las sociedades significa que sólo se puede responder de las deudas sociales con las aportaciones al capital social y no con todo el patrimonio, como es el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (en adelante SRL) o las SA. Por otro lado, en el caso de sociedades colectivas y comanditarias simples encontramos la responsabilidad ilimitada con la que los socios deberán responder de forma solidaria y subsidiariamente con todo su patrimonio frente a los terceros. Para observar de forma esquemática los tipos de sociedades existentes se adjunta la tabla 1.1.

¹¹ CASANOVA CLAROS, M. (2014): “Empresa y responsabilidad: alcances”. *Vox Juris*, Vol. 27, N°. 1, p. 27.

¹² GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, R. (2013): “Responsabilidad...” cit. pp. 206-210.

PERSONALIDAD	FORMA	RESPONSABILIDAD
PERSONAS JURÍDICAS	Sociedad colectiva	Ilimitada
	Sociedad de responsabilidad limitada	Limitada al capital aportado
	Sociedad Limitada Nueva Empresa	Limitada al capital aportado
	Sociedad anónima	Limitada al capital aportado
	Sociedades Mercantiles	Socios colectivos: Ilimitada
		Socios comanditarios: Limitada
		Socios colectivos: Ilimitada
	Sociedades mercantiles especiales	Socios comanditarios: Limitada
		Limitada al capital aportado
		Limitada al capital aportado
	Sociedad de inversión mobiliaria	Limitada

Tabla 1.1 Proporcionada por CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas)¹³.

Ahora bien, lo interesante será resolver la siguiente cuestión: ¿todos los actos realizados por un administrador obligan a la sociedad? ¿Son todos ellos en beneficio de esta y bajo el ámbito de actuación otorgado?

Entenderemos que todos los actos que los administradores realicen en nombre de la sociedad y siempre y cuando estén dentro del ámbito de su competencia serán actos realizados por la sociedad y por tanto obligarán a esta frente a los terceros¹⁴.

Para determinar el ámbito de responsabilidad de la sociedad se tendrá en cuenta, en principio, el objeto social de la misma. Un objeto social muy poco delimitado otorgará grandes competencias a un administrador y, por tanto, mayor libertad quizá para realizar actos que no fueran necesariamente beneficiosos para la misma. Es por tanto muy

¹³ http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?titulo=tipos_sociedades

¹⁴ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. p. 230.

importante observar en el objeto social de la empresa si el acto realizado está comprendido o no, ya que si no lo estuviera, no vincularía a la sociedad si pudiera probarse la mala fe y la culpa grave del tercero, algo que en numerosas ocasiones en estos años de crisis no ha sido posible probar y ha llevado a la quiebra a empresas importantes.

Sánchez Calero hace referencia en su comentario a la modificación de la Ley que otorgó nulidad absoluta a la lista de facultades que normalmente se utilizaba en los estatutos de las sociedades para delimitar el ámbito de actuación del administrador. Estos listados sólo serán efectivos de manera interna en una sociedad, destacando por tanto como él anota, el carácter ilimitable del poder de representación otorgado a los administradores.¹⁵

Abordaremos con más detalle esta cuestión en el epígrafe 3 de nuestro trabajo, titulado la Responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital, observando detenidamente la responsabilidad que se derive de los actos realizados por el administrador frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los terceros, así como las acciones de responsabilidad que se podrán llevar a cabo.

3. LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

En primer lugar, y como cuestión previa, queremos indicar a qué nos referimos cuando hablamos de sociedades de capital: estamos haciendo referencia a tres clases de sociedades mercantiles (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y sociedades comanditarias por acciones), sociedades todas ellas caracterizadas como capitalistas, lo cual implica que lo importante y lo que se tendrá en cuenta es la aportación a la sociedad por parte de los socios y no las condiciones personales de éstos¹⁶.

¹⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 231-232.

¹⁶ AAVV (MENENDEZ, A; ROJO, A. directores) (2014): *Lecciones de Derecho Mercantil*. Vol. I. Ed. Civitas, Navarra. p. 415.

Son sociedades que tienen su capital dividido en partes alícuotas, llamadas acciones o participaciones sociales en función de la clase de sociedad y todas ellas tienen una responsabilidad limitada, es decir, la responsabilidad y posible pérdida se limita a la cantidad aportada de capital social. Un socio no asume responsabilidad personal por las deudas que la sociedad pueda tener¹⁷.

En las sociedades anónimas y limitadas encontramos la existencia de una dualidad de órganos necesarios: la junta general y los administradores. La junta general será la encargada de expresar la voluntad social mediante los acuerdos adoptados, acuerdos que vincularán y obligarán a los administradores y a todos los socios (Art. 159.2 TRLSC)¹⁸ mientras que los administradores son los encargados de la gestión de la sociedad, digamos que representarían la gestión de la operativa diaria, lo que podríamos vincular con la gestión operativa de la sociedad siempre y cuando se realicen actividades u operaciones vinculadas al correcto desarrollo del objeto social. Tienen facultad de representación de la sociedad y la representan en su relación con terceros¹⁹.

3.1 NOMBRAMIENTO, DURACIÓN Y CESE

El nombramiento del administrador viene precedido en primer lugar por un detalle importante que no debemos pasar por alto. Es evidente que tal y como hemos explicado, una sociedad necesitará contar con un órgano de administración para poder realizar sus actos pero cabe destacar que son necesarios una serie de requisitos para poder desempeñar el cargo de administrador.

Los administradores de una sociedad podrán ser personas físicas o jurídicas (Art. 212.1 TRLSC). Existe la posibilidad de que la función de administración la desarrolle una persona única o que esté ejercitada por varias personas²⁰. El papel de administrador desarrollado por persona jurídica está previsto en la Ley, pero fue bastante discutido al pensar que el ejercicio del cargo por parte de este administrador persona jurídica podría

¹⁷ AAVV (MENENDEZ, A; ROJO, A. directores) (2014): *Lecciones...* cit. pp. 415-416.

¹⁸ “Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general”.

¹⁹ AAVV (MENENDEZ, A; ROJO, A. directores) (2014): *Lecciones...* cit. pp. 511-512.

²⁰ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. p. 65.

estar demasiado limitado, no obstante, esta discusión quedó zanjada bajo las instrucciones claras de fijar un reconocimiento inequívoco de las personas administradoras, bien fueran físicas o jurídicas (Art. 22.1.e TRLSC)²¹. En el caso de las personas físicas deberá constar su nombre completo (apellidos inclusive) y edad y si fueran personas jurídicas, es necesario que aparezca su denominación social además de datos que puedan facilitar su reconocimiento adecuado, como podrían ser la nacionalidad y el domicilio (Art. 138 Reglamento del Registro Mercantil, en adelante RRM)²²

En el caso de ser nombrada administradora una persona jurídica, el RRM requiere la inscripción de la persona física designada por esta persona jurídica para realizar las funciones propias del cargo (Art. 143.1 RRM)²³.

En referencia a los modos de organizar la administración, es interesante comentar lo que el artículo 210 del TRLSC indica. La administración puede recaer en uno o varios administradores, actuando de forma solidaria o conjunta o también puede confiarse a un consejo de administración. Cualquier alteración del modo de organizar la administración deberá publicitarse mediante escritura pública y ser inscrita en el RM.

En su redacción el artículo indica que en las SA si la administración es llevada por dos administradores, se actuará de forma mancomunada o si es llevada por más de dos, el modo organizativo será mediante consejo de administración. Para las sociedades limitadas se atenderá a lo que los estatutos determinen y la junta de socios podrá optar por cualquiera de estos modos sin necesidad de modificar los estatutos. En la práctica encontramos pocas formas de administración mediante administradores mancomunados

²¹ “En la escritura de constitución de cualquier sociedad de capital se incluirán, al menos, las siguientes menciones:... La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación de la sociedad”.

²² “En la inscripción del nombramiento de los administradores se hará constar la identidad de los nombrados, la fecha del nombramiento así como el plazo y el cargo para el que, en su caso, hubiese sido nombrado el miembro del Consejo de Administración”.

²³ “En caso de administrador persona jurídica, no procederá la inscripción del nombramiento en tanto no conste la identidad de la persona física que aquélla haya designado como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo”.

o solidarios, lo más habitual es que las sociedades elijan administrador único o consejo de administración. En anexo se incluyen gráficos en referencia a los tipos de sociedades más utilizados en la actualidad.

Sánchez Calero hace una puntualización interesante, al comentar que el nombramiento de una persona jurídica como administrador de una sociedad anónima no suele llevarse a cabo en la realidad, o por lo menos no de forma muy frecuente. Se prefiere que sean uno o varios administradores personas físicas las que representen a la sociedad, aunque sea bajo su mandato o en ejercicio y representación de la voluntad de la persona jurídica que posee la mayoría de derechos de voto o los necesarios para obtener el control de esta sociedad. En este caso, los consejeros se calificarían como *consejeros dominicales*. De hecho, tal y como se ha comentado anteriormente, el Art. 143.1 RRM exige la inscripción de una persona física designada por la persona jurídica. Además el TRLSC añade (Art. 212 bis)²⁴ que un administrador persona jurídica debe designar a una persona natural para ejercer las funciones y que si esta revocase su representación, no será efectiva hasta que no se hubiera designado la persona sustituta.

En virtud del artículo 212.2 del TRLSC, para ser administrador no se requiere la condición de socio salvo que así figure en los estatutos. En las sociedades de capital, por tanto, cualquier persona física podrá ser nombrada administrador, por tanto, si un socio fuera nombrado administrador, si se diera lugar la pérdida de condición de socio, no implicaría necesariamente el cese en el ejercicio de la administración de la sociedad²⁵.

Es muy importante destacar el caso concreto de algunas sociedades a las que se aplican unas condiciones específicas más estrictas a la hora de nombrar administradores, como pueden ser las relacionadas con la actividad financiera, por ejemplo, los bancos o sociedades de inversión específicas. Se exigirá en este caso honorabilidad comercial y profesional, que podrán comprobarse con las cualificaciones profesionales y morales que haya adquirido el administrador (respeto a las leyes existentes,...) aunque en los

²⁴ “1. En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

2. La revocación de su representante por la persona jurídica administradora no producirá efecto en tanto no designe a la persona que le sustituya...”.

²⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 67-68.

estatutos podrían figurar otras condiciones específicas para verificar esta honorabilidad o profesionalidad²⁶.

Existen también una serie de prohibiciones para ser administrador, que figuran en el artículo 213 del TRLSC. Por un lado encontramos prohibiciones relativas a no disponer de capacidad de obrar suficiente para ser administrador, como pueden ser los menores de edad no emancipados y los incapacitados declarados así por sentencia judicial y, por otro lado, encontramos prohibiciones a aquellas personas que, teniendo capacidad de obrar suficiente, están inhabilitadas bien sea temporal o indefinidamente, como es el caso de los inhabilitados bajo pena declarada o por el proceso en el que se encontrasen inmersos (concurados, quebrados,...) o por el cargo ejercido actual, que hace incompatible el desarrollo de este segundo (funcionarios de la Administración Pública, en adelante AP) (Art. 213.2)²⁷. Es muy importante que estas prohibiciones existan ya que de este modo se evitan los problemas derivados de ejercer una actividad (como puede ser la de funcionario en la AP) en beneficio de aquella segunda que sería privada (en una sociedad).

Entrando más en detalle del nombramiento y una vez vistos los requisitos para ser nombrado, el artículo 214 del TRLSC, estipula que la competencia del nombramiento será de la junta de socios, con las excepciones que la Ley establezca. Asimismo se refiere a la junta general como entidad con potestad para fijar garantías a presentar o relevarlos de esta prestación.

El nombramiento de los administradores se puede producir en junta general ordinaria o extraordinaria, sin un quorum reforzado o especial. Es relevante destacar que este nombramiento puede producirse estando en el orden del día previsto o aunque no lo estuviera y se realice de forma excepcional²⁸.

Existen una serie de supuestos especiales que no siguen la regla general para el nombramiento de los administradores, que se realizaría por acuerdo de junta general. En

²⁶ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 69-70.

²⁷ “2. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal”.

²⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 88-89.

aplicación del artículo 22 apartado e) TRLSC, en el momento de la constitución de la sociedad, hasta la celebración de la primera junta, se deberá nombrar y registrar en su escritura de constitución unos administradores que se encargarán inicialmente de la administración y representación de la sociedad, que además figura también en el artículo 114.6 del RRM²⁹.

Los administradores pueden ser también nombrados, en el caso de que se estructure la administración de la sociedad mediante Consejo de administración, por acciones voluntariamente agrupadas, en base al Art. 243.1 TRLSC³⁰, mediante el llamado “sistema de representación proporcional”. Existe también en base al Art. 244 el sistema llamado “cooptación”, que permite designar al consejo administradores para cubrir vacantes en caso de que no existan suplentes, aunque estos sólo podrán ocupar el cargo hasta la primera junta general.

En determinadas sociedades que deban estar sometidas a vigilancia especial o control estricto por parte de la Administración Pública, en unos casos determinados, ésta podrá nombrar administradores sociales. En caso en el que, por ejemplo, la sociedad sea una entidad aseguradora o bien una sociedad del ámbito financiero, como pudiera ser un banco, la AP podrá designar de forma cautelar un órgano de administración en caso de que las circunstancias de excepcional gravedad así lo requieran, asimismo, en empresas públicas también existen supuestos en los que la AP podrá nombrar administradores.

El nombramiento de suplentes que en el TRLSC se recoge en su artículo 216 se lleva a cabo con objeto de facilitar la gestión estable y duradera de la entidad³¹. En caso de sanción, inhabilitación o incluso fallecimiento de los administradores titulares, pasarán a desempeñar el cargo los suplentes. Tanto los titulares como los suplentes, en el momento de la inscripción, deberán cumplir los requisitos para ser nombrados

²⁹ “1. En la inscripción primera de las sociedades anónimas deberán constar necesariamente las circunstancias siguientes:... 5.ª La identidad de las personas que se encarguen inicialmente de la administración y representación de la sociedad”.

³⁰ “1. El consejo de administración estará formado por un mínimo de tres miembros. Los estatutos fijarán el número de miembros del consejo de administración o bien el máximo y el mínimo, correspondiendo en este caso a la junta de socios la determinación del número concreto de sus componentes”.

³¹ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 91-94.

administrador. Además, el artículo determina también que si un suplente queda nombrado administrador, lo hará por el periodo de tiempo que restase de cumplimiento, es decir, si se nombra un administrador inicialmente, por ejemplo, por 4 años y por alguno de los supuestos que en la Ley se recoge deja de ocupar este cargo a los 2 años, el suplente ejercerá por los 2 años restantes.

El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación, tal y como figura en el artículo 214.3 TRLSC. Podemos observar que el nombramiento debe ser aceptado para manifestar la voluntad inequívoca de realizar esta tarea para la que ha sido designado. La aceptación no dispone de un plazo, aunque es evidente que lo importante para que la sociedad pueda desempeñar correctamente su labor es que esta situación no se demore demasiado en el tiempo. En los estatutos se podrá fijar un plazo máximo para la aceptación

Esta aceptación se podrá producir de manera verbal o escrita³² y destacaremos que no podrá producirse una inscripción de un administrador si no consta su aceptación, tal y como se puede extraer del artículo 215 del TRLSC. Además, esta inscripción una vez producida su aceptación, tiene carácter de obligatoria y se fija un plazo de 10 días en el apartado 2 de este mismo artículo.

En el caso de que esta inscripción no se produjera en el plazo estipulado por la Ley, la sociedad quedaría obligada a responder por el incumplimiento, así como también las personas designadas para realizar este registro y que no cumplieron en tiempo y forma con su cometido.

A la vez que se efectúa esta inscripción en el Registro Mercantil (en adelante RM), deberá figurar el plazo y cargo para el que hubiese sido nombrado. Además en la inscripción debe inscribirse información sobre si la gestión administrativa será realizada de forma indistinta por aquellos nombrados o bien si han de realizarla de manera conjunta. Para que el hecho sea conocido y pueda ser oponible frente a terceros, se deberá publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (en adelante BORME)³³.

³² SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. p. 95-97.

³³ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 110-113.

La duración del cargo, conforme al artículo 221 del TRLSC y salvo disposición contraria en los estatutos, será por tiempo indefinido para las SRL sin un plazo máximo determinado, y con un plazo máximo de 6 años para las Sociedades Anónimas (en adelante SA), aunque podrán ser reelegidos para el cargo una o varias veces. Este plazo máximo establecido por Ley parece tener por objeto de que los administradores sean sometidos a una revisión periódica de su gestión y un refrendo de su cargo por otro nuevo periodo, lo que quizá es también redactado en la Ley para reforzar el poder de la Junta General en la participación en decisiones clave de la sociedad y estimular de alguna forma una buena gestión por parte de los administradores si quieren ser reelegidos³⁴.

El ejercicio del cargo de administrador podrá concluir por varias razones, una de ellas es la caducidad, conforme al artículo 222 del TRLSC, una vez que haya vencido el plazo para el que fue elegido y celebrada la junta o transcurrido el plazo en el que debería haberse celebrado. La otra posibilidad de término del ejercicio la tenemos en el cese de los administradores, que viene recogido en los artículos 223 y 224 del TRLSC. Estos artículos establecen que la junta general tiene potestad para cesar en cualquier momento a los administradores, quizá como anteriormente se ha comentado, fuera simplemente por la pérdida de confianza en el administrador o por cualquier otro motivo, aunque en base a ellos, se hace referencia a que en la sociedad limitada, de existir alguna norma que requiriera mayoría reforzada para estos acuerdos, esta mayoría no podrá superar los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en las que se divida el capital.

Precisamente es posible que la redacción del 223.2 sea en este sentido, para facilitar de alguna forma la separación de este administrador en las SRL que ya no goza de confianza para serlo.

El cese entendido como tal, no tiene una connotación exclusivamente negativa. Cese es considerado todo término de duración antes de la fecha de caducidad que se hubiera determinado. Aunque lo lógico es intentar que exista estabilidad para el correcto funcionamiento de la sociedad. Como hemos comentado, el cese podrá producirse por diversos motivos como pueden ser dimisión o renuncia al cargo, formulación de una

³⁴ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 121-122.

OPA por otra sociedad y, por tanto, cambio del control de la empresa, existencia de decisión judicial o también incluso la separación de los administradores que tuvieran intereses opuestos a la sociedad³⁵.

No debemos olvidar que un administrador representa la confianza depositada en él por parte de los socios, en el momento que esta confianza se pierde, es importante poder cesarlo lo más pronto posible en sus funciones para que no pudiera causar daño a la sociedad o, si se estima que esto ya ha sucedido, no siguiera haciéndolo. Quizá por ello la Ley prevé el supuesto de nombramiento de un nuevo administrador esté o no en el orden del día, ya que es en el momento en el que se reúnen todos los socios cuando pueden darse cuenta de que el problema es que ya no existe esa confianza que antaño hubo en el administrador y es necesario que este sea cesado y nombrado otro nuevo.

3.2 FUNCIONES Y COMPETENCIAS. DEBERES

En este apartado, tendremos en consideración que dentro de las funciones y competencias de un administrador, encontramos los deberes, a los que estarán sujetos los administradores para ayudar al correcto desempeño de su cargo y poder determinar su responsabilidad.

Los administradores tal y como comenta Sánchez Calero, por destacar algunos, tendrán los deberes de gestión y de representación de la sociedad, entre los que es interesante comentar todos aquellos que se relacionan con obligaciones y acciones, así como la correcta gestión de los flujos financieros asociados con estos instrumentos y cuidar con especial interés el buen ejercicio del derecho de información. Si hubiera un juicio, deberán representar a la sociedad conforme a lo que estipulen los estatutos. Además, respecto a los terceros, se determina una labor imprescindible de los administradores, siendo estos los que tienen facultades para modificar contratos, organizar, hacer una nueva petición de auditores si estos no cumplieran, así como también la obligación de colaborar con la justicia si la sociedad se viera inmersa en un proceso concursal o un juicio³⁶.

³⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 133-170.

³⁶ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 175-176.

Debemos tener en cuenta que la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo ha modificado los artículos que se refieren a los deberes de los administradores, por tanto, es necesario prestar atención a su nueva redacción. En los artículos 225-229 del TRLSC se concretan cada una de los deberes y obligaciones de los administradores que pasaremos a comentar a continuación. La reforma de la Ley en su apartado de los deberes del administrador se fundamenta en la preocupación por el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades ya que han jugado un papel muy importante en el comienzo y transcurso de la actual crisis financiera. El objetivo de los legisladores es intentar mejorar la confianza depositada en los órganos de gobierno y gestión de las sociedades, con intención de que esa mejora de confianza traerá inversiones al proporcionar regulación específica a la que atenerse a la hora de controlar a los administradores y esto generar un clima de confianza³⁷.

El primero de los deberes de los administradores aparece en el artículo 225 TRLSC, es el deber general de diligencia que siempre se había considerado algo abierto, que debía ser interpretado en función de las circunstancias concretas de cada caso, ya que en función del objeto social, tamaño de la sociedad, coyuntura económica,... podía variar su correcta interpretación. En la nueva redacción aparece mejor ordenado y especificado³⁸.

Este deber hace referencia principalmente al comportamiento que el administrador ha de tener con respecto a la gestión de la sociedad. Se considerará diligente tal y como figura en la RAE³⁹ aquella gestión cuidadosa, exacta y activa. Hace además referencia a un ordenado empresario refiriéndose a llevar de la mejor forma que pueda y sepa la gestión, basándose en información y estudios para llevar a cabo la toma de decisiones correspondientes al cargo que ocupa, tal y como señala el art. 225.2 “deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad”. Es cierto que estas decisiones se toman en entornos

³⁷ FRANCH FLUXÀ, J. (2015): “Breve comentario a las últimas reformas societarias introducidas por Ley 31/2014”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 44, pp. 389-397.

³⁸ QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2015): “Los presupuestos de la responsabilidad de los administradores en el nuevo modelo del Consejo de Administración”. *Revista de derecho mercantil*, Nº 296, p. 144.

³⁹ <http://lema.rae.es/drae/?val=diligente>

competitivos donde nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el resultado seguro de una determinada operación, pero las decisiones, en este sentido, deberán ser valoradas de la forma que con la información disponible en aquel momento era la mejor opción de todas las posibles consideradas, además destacando el papel que la ética deberá tener en su gestión, pues al fin y al cabo, está administrando bienes ajenos. En base a esta obligación de informarse antes de decidir, en su apartado 3 la ley redacta que “el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones”.

El deber de información al que nos hemos referido (Art. 225.3 TRLSC) no es únicamente para el administrador ejecutivo, lo es también para aquel que sólo forma parte del consejo de administración. Se considera en este aspecto que un consejero no ejecutivo también debe estar bien informado y ser informado por el administrador, puesto que en su labor como consejero está también depositada la representación de la sociedad e influye en la toma de decisiones dentro de la sociedad. Por ello, un administrador siempre deberá dedicar el tiempo que sea necesario en conseguir toda aquella información que pueda necesitar, requiriéndola para ello a cualquier persona necesaria, sean cargos intermedios, trabajadores o cualquiera que pudiera disponer de ella⁴⁰ o incluso investigando y contrastando por su parte todo aquello que requiera para obtener información veraz sobre el hecho que necesite conocer⁴¹. En este aspecto, el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, hecho público a principios de este año 2015 por la CNMV⁴², recoge recomendaciones complementarias para el deber de diligencia (frecuencia de reuniones del consejo, funciones de presidente y secretario, información de los consejeros,...)

Del incumplimiento de este deber, si en su decisión causara daño a la sociedad esta no podría achacarse a la falta de información, pues es deber inherente del cargo que ocupa.

⁴⁰ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 185-188.

⁴¹ QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2015): “Los presupuestos...” cit. p. 144.

⁴² En referencia al Código de buen gobierno, que puede consultarse en la página: http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/Codigo_buen_gobierno.pdf en el que se han basado la mayoría de las reformas introducidas por la ley.

Consideramos importante la inclusión del nuevo artículo 226 “protección de la discrecionalidad empresarial” (conocido por principio de la “business judgement rule”). La idea principal del mismo es lograr un ámbito de actuación en el que el administrador sea libre de obrar bajo su propia percepción y conocimiento en determinadas decisiones “estratégicas y de negocio” como la propia redacción cita, sin que estas puedan ser juzgadas contrarias al deber de diligencia siempre y cuando hayan sido efectuadas de buena fe⁴³ y cuando estas acciones o decisiones no afecten personalmente a otros administradores, personas vinculadas o autoricen operaciones recogidas dentro del “régimen de imperatividad y dispensa” (Art. 236.2 TRLSC), régimen desarrollado en el artículo 230 del TRLSC.

El artículo 227 del TRLSC se refiere al deber de lealtad, los administradores deben desempeñar su cargo “con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad”. Este deber de lealtad debe encaminarse a defender el interés social frente al suyo, así como deberá administrar de forma ética, es decir, absteniéndose de obtener beneficios personales a costa de minorar los intereses o beneficios de la sociedad. Además es muy importante destacar la labor en el largo plazo del administrador, teniendo como objetivo la estabilidad de la sociedad y creación de valor de manera sostenida en el largo plazo y no únicamente en el corto. El apartado 2 indica además que si hubiera incumplimiento, el administrador tiene obligación de indemnizar el daño causado a la sociedad así como de devolver el enriquecimiento injusto obtenido.

Es curioso observar cómo Sánchez Calero decía ya en el 2007 que las obligaciones básicas del administrador que venían redactadas en varios artículos, la mayoría de ellas derivaban del deber de lealtad⁴⁴, de la gestión que se considera ética de la sociedad. La redacción del artículo 228 del TRLSC precisamente se titula “obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad”.

La reforma de la Ley ha significado la calificación de los supuestos de deslealtad que antes venían recogidos en varios artículos de forma algo más desestructurada como obligaciones derivadas del deber de lealtad en una lista no cerrada, lo que significa que

⁴³ QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2015): “Los presupuestos... cit. p. 145.

⁴⁴ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 189 y ss.

se pueden identificar otros casos que no estando recogidos dentro del artículo 228 TRLSC puedan encajar dentro de lo determinado con carácter general en el artículo 227 TRLSC.

En este artículo encontramos obligaciones concretas, como pueden ser no utilizar sus facultades fuera del ámbito de actuación que se le ha otorgado (Art 228.a TRLSC), obligación de secreto sobre aquellos datos a los que hubiera tenido acceso por el desempeño de su cargo, obligación que se extiende incluso cuando ya haya cesado en sus funciones, salvo para los casos que la ley lo permita o requiera (Art. 228.b TRLSC), abstención en caso de conflicto de intereses bien sea directo o indirecto. En particular este apartado se complementa con el apartado e) de este mismo artículo, diciendo que el administrador está obligado a “adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad” (Art. 228.e TRLSC) y además es explicado con mayor detalle en el artículo 229 de esta misma Ley. En su apartado d), la Ley fija la obligación de “desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal, con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones con terceros”, situación que se deriva de las nuevas obligaciones incluidas en el deber de lealtad en cuanto a las situaciones de conflicto de interés⁴⁵.

El deber de secreto, que Sánchez Calero indicaba que en realidad provenía del deber de lealtad y fidelidad a la sociedad, ahora recogido en el artículo 228 bajo una obligación derivada del deber de lealtad, es muy importante para la sociedad y se concreta en este punto para evitar que información relevante pueda caer en manos contrarias al correcto funcionamiento de la sociedad. Recordemos que el administrador tiene acceso a todos los documentos confidenciales de la sociedad y de hecho tiene el deber, como anteriormente comentamos, de informarse correctamente de todo lo que puede afectar al correcto funcionamiento de la sociedad tanto en el corto como en el largo plazo, así como los hechos sucedidos anteriormente⁴⁶.

⁴⁵ QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2015): “Los presupuestos... cit. p. 145-147.

⁴⁶ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 211-213.

Cabe detallar que la información a la que el artículo se refiere es toda aquella que consideramos específicamente de carácter confidencial ya que según la RAE, confidencial es la información que se recibe en confianza o revelada con valor de secreto frente a terceros⁴⁷, es decir, en base al artículo aquella obtenida por el desempeño de su cargo. No se verá afectada la información obtenida por otros medios. La idea, como hemos comentado, es intentar que la información que si fuera revelada podría causar daño o perjuicio a la sociedad, se siga manteniendo en secreto. Aunque no hay que olvidar que ante requerimiento de la justicia, este deber no operará y prima el deber de colaboración explicado previamente⁴⁸.

La obligación de guardar secreto continuará más allá de la duración del ejercicio del cargo de administrador de la sociedad, es decir, una vez cesado este deber seguirá estando vigente. El tiempo de duración del deber de secreto es, en principio, indefinido aunque si nos encontramos con que los hechos fueran publicados o conocidos de forma generalizada, este deber quedaría extinguido⁴⁹. Para los cargos administrativos que manejan gran parte de información confidencial existe en numerosas ocasiones, como en el caso de los bancos, una prohibición por tiempo limitado por contrato de pertenecer a la administración de otras sociedades. Esta prohibición, al impedir la libre circulación, está bonificada normalmente con un salario o compensación mientras dure el periodo prohibido.

El artículo 228 del TRLSC también hace referencia, en su apartado c), a la obligación del administrador de abstención en deliberación y votación en caso de conflicto de intereses, bien sea un conflicto propio o de una persona vinculada, sea por tanto conflicto directo o indirecto de intereses. Aunque en el caso de acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador (como pueden ser designación o revocación), sí que podrá deliberar y votar. El artículo 229 del TRLSC sigue conteniendo el deber de evitar situaciones de conflicto de interés, en relación con los apartados comentados 228 c) y e).

⁴⁷ <http://lema.rae.es/drae/?val=confidencial>

⁴⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 213-216.

⁴⁹ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 220-221.

El administrador debe evitar realizar transacciones con la sociedad, exceptuando las de escasa relevancia y que se realicen en los mismos términos y condiciones que un cliente estándar. Se entienden de escasa relevancia las que no afecten a la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la entidad (Art. 229.1.a TRLSC). No podrán tampoco utilizar el nombre de la sociedad o hacer uso de su condición de administrador para influir en la realización de operaciones privadas (Art. 229.1.b TRLSC). El principal objetivo de este artículo es evitar que en operaciones realizadas fuera del ámbito de actuación de la sociedad sea aprovechado el nombre de esta para realizar cualquier prestación. La idea es que esta prestación puede inducir a error por parte de un tercero, desprestigiar a la sociedad o incluso podría perder en perjuicio de la sociedad algunas oportunidades de negocio o nichos de mercado⁵⁰.

En todo caso, este apartado se redacta bajo el precepto de defender el interés de la sociedad y los socios por delante del suyo propio para, de este modo, ejercer correctamente el cargo. En numerosas ocasiones el administrador cuenta con información relevante y oportunista de los que no disponen el resto de la sociedad ni los socios⁵¹.

En el sentido de este apartado b) del artículo 229.1 TRLSC, es interesante indagar en la conducta principalmente prohibida para el administrador, que es realizar autocontratos, bien sea con él mismo o con personas vinculadas⁵².

El administrador estará obligado a abstenerse también de hacer uso de los activos sociales como información confidencial de la compañía con fines privados (Art. 229.1.c TRLSC) así como también debe abstenerse de aprovechar oportunidades de negocio (Art. 229.1.d TRLSC) incluyendo como hemos dicho la prohibición de realizarlo a las personas a él vinculadas. Si bien es cierto que cuando la sociedad, sin ejercer influencia el administrador, haya desestimado la oportunidad de negocio, entonces se considerará fuera de la prohibición. Por tanto queda prohibido para el administrador realizar

⁵⁰ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 193-194.

⁵¹ RAMOS HERRANZ, I. (2015): “El deber de abstenerse de usar el nombre de la sociedad o la condición de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 44, p. 306.

⁵² Es interesante la consulta de la bibliografía citada, pues redacta con mayor extensión y detalle los autocontratos RAMOS HERRANZ, I. (2015): “El deber...” cit., Nº 44, p. 307 y ss.

cualquier actividad externa que pudiera provocar un perjuicio a la sociedad, entendiéndose este hecho como una posible falta al deber de lealtad o fidelidad hacia la sociedad⁵³. Se destacan en referencia a este apartado que las oportunidades de negocio deberán ser caracterizadas como inversiones u operaciones ligadas a los bienes de la sociedad⁵⁴ aunque esto hará que muchas operaciones queden fuera de este precepto⁵⁵.

Estas oportunidades de negocio deberán ser conocidas como consecuencia de haber ocupado el cargo o en el ejercicio de sus funciones como administrador. La duda surge al limitar tanto este precepto, pues es complicado establecer la conexión causal entre la información obtenida y si ésta ha sido como consecuencia de ser administrador, norma muy criticada por algunos autores, puesto que consideran que el administrador en todo caso debe hacer lo mejor para la sociedad, para maximizar su valor⁵⁶.

En opinión de algunos autores y en base a la complejidad de aplicación inequívoca de esta normativa, deberían mejorarse la redacción de estos preceptos para que no se pudiera eludir en ningún caso su cumplimiento, evitando en la medida de lo posible mencionar aspectos que acoten demasiado la normativa⁵⁷.

En su redacción actual, el artículo 229.1 TRLSC continúa diciendo que los administradores deben evitar “obtener ventajas o remuneraciones de terceros... salvo que se trate de atenciones de mera cortesía” (Art. 229.1.e TRLSC). Puede observarse en la redacción del artículo la intención de evitar posibles regalos en compensación por tratos de favor, haciendo así que la competencia entre empresas pueda ser más leal. En este sentido también hace referencia a evitar desarrollar actividades que entren en competencia con las que desarrolla la sociedad (Art. 229.1.f TRLSC).

⁵³ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 194-195.

⁵⁴ LLEBOT MAJÓ, J. O. (1996): *Los deberes de los administradores de la Sociedad Anónima*. Ed. Civitas, Madrid. pp. 41 y ss.

⁵⁵ IGARTUA ARREGUI, F; JUSTE MENCÍA, J. (2005): “Deberes de los administradores (reforma de la LSA por la Ley de Transparencia)”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 24, p. 80.

⁵⁶ PORTELLANO DÍEZ, P. (1996): *Deber de fidelidad de los administradores mercantiles y oportunidades de negocios*. Ed. Civitas, Madrid. p. 48.

⁵⁷ ESTUPIÑÁN CÁCERES, R. (2014): “El deber del administrador de abstenerse de aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad: configuración e incidencia de su infracción en la calificación del concurso y en la responsabilidad concursal”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 43, pp. 180-181.

Como comentamos anteriormente, estas prohibiciones no atañen únicamente a la persona administradora, sino a cualquiera que esté vinculado al administrador (Art. 229.2 TRLSC).

Para detallar las personas afectadas por esta normativa, en el artículo 231 del TRLSC, encontramos las personas que se consideran por Ley vinculadas a los administradores, como pueden ser el cónyuge, ascendientes y descendientes, hermanos así como otras personas físicas que podrían entenderse vinculadas a este si el administrador fuera persona jurídica.

Siempre que se produzca una situación de conflicto de interés, el administrador deberá comunicar al resto de administradores, consejo de administración o junta general (si se trata de un único administrador) esta situación y deberá figurar información sobre este conflicto de intereses en la memoria (Art. 229.3 TRLSC) tal y como indica el artículo 259 TRLSC. Es importante que las situaciones que puedan provocar conflictos entre el patrimonio propio o los propios intereses y los de la sociedad sean reguladas de forma específica, pues lo que interesa es que un administrador realice la función en beneficio de la sociedad, manteniendo su lealtad hacia esta.

Existe incluso una previsión específica en la Ley del Mercado de Valores (en adelante LMV) en su artículo 81, desarrollando en concreto las situaciones en las que existe conflicto de intereses. En ella se trata de incidir en la no participación en las votaciones de aquella parte de capital que esté representado por el administrador o personas que pudieran estar vinculadas, tal y como se expresaba en el artículo anteriormente comentado. Esta normativa hace especial hincapié en la prohibición del uso de información privilegiada o relevante (definida en el artículo 82 LMV) para beneficio propio, algo que si bien es complicado posteriormente demostrar, debe existir una Ley que regule la correcta transparencia y fijación de precios óptima en el mercado de valores, bajo el supuesto de que todos los agentes poseen la misma información⁵⁸.

En el artículo 230 TRLSC encontramos el “Régimen de imperatividad y dispensa”, lo que viene a regular las excepciones en la aplicación de los artículos anteriores, no obstante, el deber de lealtad y la responsabilidad del administrador no puede limitarse o

⁵⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 207-211.

ser contraria a lo que dictan los artículos anteriores, es decir, no serán válidas las cláusulas estatutarias en este sentido (Art. 230.1 TRLSC).

El administrador podrá tener autorización para autocontratar, aunque se requerirá una autorización concreta para cada situación, bajo el precepto de que las autorizaciones deberían tener, como regla general, carácter individualizado y expreso⁵⁹. De hecho la Ley dice “...la sociedad podrá dispensar las prohibiciones contenidas en el artículo anterior en casos singulares autorizando la realización por parte de un administrador...”. Si esta autorización no fuese para una única operación sino para operaciones continuadas en el tiempo, se deberán modificar los estatutos sociales para incorporar esta nueva facultad del órgano de administración⁶⁰.

La obligación de no competir con la sociedad sólo puede dispensarse si no se espera daño a la sociedad o los beneficios aportados son mayores que los costos. A instancia de cualquier socio, si esta competencia es relevante y puede hacer daño a la sociedad, el administrador podrá quedar cesado en sus funciones (Art. 230.3 TRLSC).

3.3 REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

Para regular la representación de la sociedad, los artículos 233 a 235 del TRLSC desarrollan la titularidad de esta representación así como las reglas por las que se regirá. Los administradores serán los titulares de la representación de la sociedad y, por tanto, los que la podrán obligar frente a los terceros. Los estatutos determinarán la forma de la representación.

Observamos una evolución en cuanto a la protección a los terceros que contratan con la sociedad desde la publicación de la Directiva comunitaria⁶¹. Esta directiva trataba de vincular u obligar a la sociedad por los actos que los administradores realizaran con terceros bajo esta representación que les era conferida. La idea era, como hemos

⁵⁹ RIBAS FERRER, V. (2012): “Deberes de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital”. *Revista de derecho de sociedades*, N° 38, p. 124.

⁶⁰ RAMOS HERRANZ, I. (2015): “El deber...” cit., N° 44, pp. 314-315.

⁶¹ Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2003, DO de la UE de 4.9.2003, L. 211/13. Por la que se modifica la Directiva 68/151/CEE del Consejo en lo relativo a los requisitos de información con respecto a ciertos tipos de empresas.

comentado anteriormente, que los actos del administrador fueran vinculantes tanto si se recogían en el objeto social como si no aparecían, con el fin, sobre todo, de proteger al tercero de buena fe. Se desarrolló por tanto una normativa que fuera acorde a la Directiva europea y evitara el posible incumplimiento de obligaciones por parte de la sociedad por ser estas ajenas al objeto social, otorgando así un marco de seguridad jurídica a los terceros contratantes.

Los administradores serán considerados por lo tanto los representantes de la sociedad y los actos que realicen dentro del ámbito de su competencia serán considerados realizados por la sociedad. En este punto, es importante destacar que pueden existir límites a la forma o atribuciones pero estas sólo serán válidas con carácter interno, pudiendo ser utilizadas para cesar a un administrador en virtud de ir contra lo fijado en los estatutos. Estos límites, por tanto, nunca provocarán una posible nulidad o anulación de contratos con terceros, su alcance será meramente interno en la sociedad⁶². En concreto, el artículo 234 del TRLSC se refiere a este punto, en el que explica que las limitaciones aunque se hallen inscritas en el RM, serán ineficaces frente a los terceros y además si hubiese un acto realizado fuera del objeto social de la sociedad, si los terceros contratantes han obrado de buena fe y sin culpa grave, la sociedad quedará vinculada.

En el artículo 233 del TRLSC encontramos información concreta sobre la atribución del poder de representación. Esta atribución dependerá del modo de administración elegida (administrador único, varios administradores, consejo de administración,...), en la forma que los estatutos determinen. Complementaria a la redacción de este artículo, encontramos normativa específica en el RRM, en concreto en su artículo 124.2.

No todos los administradores tendrán poder de representación de la sociedad. Pueden existir administradores que son nombrados para realizar únicamente labores administrativas en la sociedad pero no ostentan poder de representación. Imaginemos el caso de que en una sociedad en la que la atribución del poder de representación se confiere al Consejo en su totalidad, pero no a un administrador en concreto, por tanto las decisiones tomadas por el consejo sí que vincularán a la sociedad frente a terceros, pero un administrador no podría vincular de forma individual a la misma.

⁶² SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 225-231.

Los estatutos deberán fijar si este poder de representación además de tenerlo el Consejo lo puede tener un administrador individual de forma concreta, o dos, o varios. Además deberán fijar también si lo tiene de forma individual o debe realizarse de forma conjunta con los otros administradores nombrados (Art. 124 RRM).

Debemos en este sentido destacar también que en las SA las atribuciones y competencias de estos administradores vendrán regidas por lo que la Ley impone tanto en el TRLSC como en el propio RRM, que viene a fijar unas atribuciones concretas que se consideran inherentes a todo administrador, como pueden ser, por ejemplo, la formulación y presentación de las cuentas anuales de la sociedad (Art. 365 y ss. RRM).

Siguiendo la redacción del artículo 233 del TRLSC, en su apartado 2, encontramos reglas para cada uno de los casos posibles de administración de una sociedad. En su primer apartado, redacta que en el caso de un administrador único, el poder de representación corresponderá necesariamente a este. Los estatutos de la sociedad fijarán en este caso cómo se debe estructurar el órgano de representación, si en este caso la forma elegida es administrador único, es lógico pensar que si sólo hay un administrador nombrado en la sociedad, el poder de representación deba recaer sobre este.

Es cierto que este administrador podrá nombrar apoderados singulares para determinadas tareas o atribuciones, para que le ayuden en la gestión de la sociedad, pero esto en ningún caso quiere decir que la representación se realice de forma conjunta. Nunca podrá ser considerada labor delegada sino labor realizada por otra persona en virtud de este apoderamiento conferido y, por tanto, el representante único de la sociedad y aquel que en realidad vinculará a la sociedad será el nombrado de forma oficial como administrador único⁶³.

En el caso de varios administradores, el artículo 233.2 del TRLSC fija que si estos son nombrados bajo la forma de administradores solidarios, el poder de representación se confiere a cada uno de los administradores. En este caso los estatutos podrán fijar límites o atribuciones para cada uno de los administradores nombrados, pero sólo tendrán alcance interno. Nos encontramos ante un caso de múltiple representación, en la que cualquier acto realizado por cualquiera de los nombrados, vinculará a la sociedad

⁶³ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 233-238.

aunque los demás administradores no estuvieran de acuerdo, en virtud de la representación solidaria conferida. En la redacción de este artículo, podemos observar que los administradores considerados solidarios serán dos o más, simplemente dice varios en la Ley. Para las SA no se considera admisible que 2 administradores nombrados de esta manera puedan considerarse mancomunados, puesto que la Ley, fija al menos un mínimo de 3 administradores para realizar la labor de forma mancomunada.

En el caso de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercitará mancomunadamente, tal y como cita el artículo 124.2 del RRM. De hecho, la Ley exige que en todo momento se verifique la conformidad de ambos de forma inequívoca, aunque es cierto que no exige que sea de forma simultánea sino que podría ser de forma sucesiva la conformidad. Para determinados actos, existirá la posibilidad de que un representante pueda autorizar al otro. Se da en este sentido el caso de que los administradores puedan apoderar de forma conjunta a un tercero, que representará de forma voluntaria a estos administradores⁶⁴. La administración en forma mancomunada apenas es elegida puesto que, como requiere acuerdo de todos los administradores de forma unánime, puede bloquear el funcionamiento de una sociedad.

Si la atribución del poder de representación fuera conferida a un Consejo de administración, el artículo 233.2 del TRLSC atribuye el poder de representación al propio Consejo y señala que deberá actuar de forma colegiada. No obstante, indica también el artículo que los estatutos pueden atribuir el poder de representación de la sociedad a uno o varios miembros del Consejo a título individual o colegiado. Este punto es muy interesante en el caso de que el Consejo sea muy numeroso, pues sería complicado realizar algunas gestiones operativas y no tan estratégicas si tiene que ponerse de acuerdo el Consejo cada vez que se van a realizar. Además el Consejo puede limitar como venimos comentando, la capacidad de actuación de estas personas, pero sólo tendrá eficacia de forma interna.

La atribución de poder al Consejo se realiza en este cuarto caso de forma colegiada (Art. 233.2.d TRLSC), es decir, constituye un propio órgano de decisión y adopta acuerdos en la forma que en la Ley está prevista y una vez que estos acuerdos sean ratificados, vincularán a la sociedad con los terceros. El Consejo también podrá delegar la facultad

⁶⁴ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 238-240.

representativa, no obstante si son nombrados varios consejeros delegados, se debe designar inequívocamente aquellas labores que se ejercerán de forma solidaria y las que se ejercerán de forma mancomunada⁶⁵.

3.4 LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

Cuando nos referimos a la responsabilidad de los administradores lo hacemos con objetivo primordial de facilitar el correcto cumplimiento de lo que la Ley y estatutos de la sociedad determinen. Los administradores estarán obligados a reparar cualquier perjuicio que pudieran causar mediante acto contrario a la Ley tanto a la sociedad como a los accionistas y terceros. En realidad lo que se busca es dotar legalmente un medio de control sobre los administradores, ya que ostentan un gran poder de decisión en la sociedad. Es cierto que habrá que tener especial cuidado en caso de la delegación de las funciones, aunque existirá un régimen específico para verificar la autoría de los actos lesivos.

En la responsabilidad civil general el objetivo principal es reparar el daño causado al tercero, pero en este caso, en el de los administradores no es lo más relevante reparar el daño causado, que normalmente vendrá cubierto por un seguro de responsabilidad civil asociado al cargo ocupado, sino también el correcto establecimiento de responsabilidad penal o incluso la inhabilitación para volver a desempeñar ese cargo, bien sea por tiempo determinado o de forma indefinida⁶⁶. Interesa que una persona considerada no apta para el ejercicio de funciones de administración porque ha mostrado ser incapaz sea por acción o por omisión, no continúe teniendo esas atribuciones en la sociedad e incluso sea inhabilitado para realizarlo en otras sociedades, con objeto de evitar daños o perjuicios futuros.

En la antigua LSA de 1951 se consideraba como único elemento para determinar la responsabilidad del administrador la malicia, abuso de facultades o negligencia grave

⁶⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 241-243.

⁶⁶ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 308-310.

(Art. 79 LSA) y, por tanto, esta responsabilidad no vinculaba a aquella persona en la que hubiera recaído por delegación las facultades de dirigir la sociedad. Este es un hecho que debía ser considerado, puesto que la delegación de facultades debería siempre responsabilizar de algún modo al que las delega por elegir esa determinada persona e incluso debería estar obligado a vigilar con cuidado las actividades y el correcto desarrollo de sus funciones, para en el caso de incumplimiento, revocar la delegación. El cambio normativo en el artículo 236 del TRLSC que pasamos a comentar a continuación, sí que recoge este supuesto.

El nuevo artículo 236, redactado con intención de aplicar mejoras en el gobierno corporativo de las sociedades, hace referencia a los presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad. Aquí se vincula la responsabilidad de los administradores con la sociedad, los socios y los acreedores sociales por el daño que causen si este proviene de actos contrarios a la Ley o los estatutos o incumple los deberes inherentes del cargo. Es la primera vez que se recogen los presupuestos materiales de la responsabilidad de los administradores⁶⁷. En este sentido cabe considerar que un administrador que cumple su deber de información y toma las decisiones de la forma más correcta e informada, siendo fiel a la sociedad y buscando siempre el beneficio de ésta no debería ser responsable de los daños que se deriven. Las decisiones se tomaron de la forma más adecuada para la sociedad en ese determinado momento, aunque posteriormente se puede hallar una mejor opción viendo los resultados de la tomada. Hay que considerar que el resultado final de las decisiones es, frecuentemente, impredecible en el mundo empresarial. Al menos es muy complicado por no decir imposible conocer el futuro, si fuera sencillo, siempre se lograría tomar la mejor opción⁶⁸. Por ello y conforme al precepto citado, se exige que haya intervenido dolo o culpa..

La reforma del artículo 236.3 reconoce por fin a los administradores de hecho, “que únicamente podrá predicarse de la persona que realmente gestiona y ejecuta”⁶⁹, serán aquellos que realmente desempeñen la actividad en el tráfico normal de la sociedad pero que no tienen tal consideración o bien poseen título nulo o extinguido. Más adelante se dedicará un pequeño apartado a hablar del administrador de hecho.

⁶⁷ QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2015): “Los presupuestos... cit. pp. 140-141.

⁶⁸ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 310-311.

⁶⁹ FRANCH FLUXÀ, J. (2015): “Breve comentario... cit., pp. 398-399.

En el caso de los directores o apoderados generales no se puede aplicar en principio el régimen de responsabilidad de los administradores que en esta Ley se recoge, a falta de alguna norma específica que así lo autorice⁷⁰. Puede darse el caso que en un apoderado general o director se esconda un administrador de hecho⁷¹ lo que no está directamente relacionado con la aplicación en término general del régimen previsto en esta Ley a todos los directores generales⁷². Un apoderado general o director puede ser considerado administrador de hecho en el caso de “de forma continuada desempeñe la actividad de gestión propia de los administradores sin someterse al mandato de éstos o con independencia de los mismos”⁷³.

Existe, como hacíamos referencia anteriormente, una posibilidad de un gran daño a la sociedad derivado no de actos contrarios a la buena fe por parte de los administradores, sino simplemente debidos a que, tras la toma de la mejor decisión de las posibles en ese momento, el resultado ha sido totalmente inesperado para la sociedad. En este caso, tal y como conocemos por la teoría económica, hay que analizar múltiples factores que normalmente son difíciles de estimar e incluso impredecibles. Por mucho que hayamos estimado correctamente un modelo de comportamiento incluso habiéndolo hecho con todas las variables que fueran necesarias mediante métodos econométricos, siempre se introduce un término de perturbación aleatoria, pues el conjunto de otras variables que no hemos considerado pueden afectar a nuestro resultado final o incluso errores o variaciones impredecibles de las que ya se habían considerado. No debemos olvidar que la economía es una ciencia social y el comportamiento de las personas, si bien se entiende normalmente racional, puede variar completamente y no comportarse con rigor histórico.

⁷⁰ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. p. 312.

⁷¹ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. p. 77.

⁷² GRIMALDOS GARCÍA, M. I. (2015): “La reciente redacción del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital ¿Nuevos presupuestos? ¿Nuevos responsables?”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 44, pp. 242-243.

⁷³ LATORRE CHINER, N. (2009): “Administrador de hecho y apoderado general (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2008)”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 32, pp. 389-398.

Por tanto, además de efectuar un daño a la sociedad, el acto para que sea punible y el administrador responsable, deberá producirse siendo contrario a la Ley y lo que en los estatutos figure, además, deberá verificarse la existencia de vínculo inequívoco entre el daño que se ha producido y la acción de los administradores. Este “nexo causal” es siempre un presupuesto de la responsabilidad.

En la redacción de la LSA de 1951 sólo era considerado el acto propio del administrador como punible. Era normalmente considerada en esta redacción el “acto” como el hacer y también el no hacer cuando se tenía obligación de hacerlo (debía ser considerado obligación por Ley, como por ejemplo la obligación de asistencia a la Junta General), aunque el artículo no hacía referencia expresa a las omisiones. En el artículo 236 del TRLSC sí que encontramos ya introducida la palabra omisiones.

Si se toma una decisión colegiada, aquellos miembros que no sabían de su existencia o bien sabiendo su existencia hicieron todo lo posible por que este acuerdo no se tomara o manifestaron con su voto en contra su desacuerdo, no quedarían vinculados a la responsabilidad que de ese acuerdo se derivase (ART.237 TRLSC).

Para que podamos exigir una responsabilidad el acto debe causar daño directamente al patrimonio de la sociedad aunque posteriormente y debido a esto de forma indirecta pudieran verse afectados los accionistas o los terceros vinculados a la sociedad. Para el ejercicio de acción social de responsabilidad, por tanto, deberá ser dañada la sociedad. En el caso de verse afectados de forma directa los socios o los terceros y no es fruto de un daño directo a la sociedad e indirecto a ellos, el ejercicio de acción social de responsabilidad no será posible, viendo el único camino de resarcir el daño causado en la acción individual de responsabilidad ejercida por los accionistas o los terceros que se han visto perjudicados⁷⁴. Más adelante se comenta en un epígrafe las acciones de responsabilidad.

⁷⁴ SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores...* cit. pp. 317-321.

4. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL ¿QUIÉNES RESPONDEN?

En este apartado nos interesa delimitar a quién vamos a aplicar la normativa sobre responsabilidad de los administradores, es decir, quién será el sujeto responsable de las acciones para poder aplicar las sanciones que en la Ley están previstas. A simple vista y sólo observando la legislación, es lógico pensar que aquellos sujetos imputables serían los propios administradores, no obstante, encontramos con gran frecuencia personas físicas o jurídicas a las que se les exige responsabilidad y que no tenían la condición previa de administrador de la sociedad. Nos referimos al administrador de hecho, que pasaremos a exponer a continuación, para ello se seguirán las indicaciones de los autores citados a pie de página⁷⁵.

4.1 EL ADMINISTRADOR DE HECHO

En extensión de lo comentado anteriormente, el administrador de hecho podríamos considerarlo aquel que está ejerciendo como tal pero que no ha sido nombrado administrador o bien su cargo ha caducado. En concreto, se considera que “son aquellos que sin ocupar formalmente el cargo, ejercen de hecho y de manera efectiva las funciones de administración, sea sustituyendo a los administradores de derecho, sea influyendo sobre ellos de forma decisiva”⁷⁶. Como hemos comentado anteriormente, la Ley 31/2014 ha introducido en la legislación sobre sociedades de capital en la responsabilidad al administrador de hecho (Art. 236.3 TRLSC).

La jurisprudencia ya aplicaba la Ley al concepto administrador de hecho de la misma forma que a los administradores válidamente nombrados⁷⁷.

⁷⁵ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 55-56.

⁷⁶ QUIJANO GONZÁLEZ, J. (1989): *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima*. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid. p. 351.

⁷⁷ Un ejemplo de ello es la STS de 4 de diciembre de 2012.

4.2 EL ADMINISTRADOR OCULTO

Es necesario distinguir entre los posibles administradores de hecho. Considerando administrador de hecho el que actúa frente a los terceros como administrador, si se presentara directamente a ellos digamos en primera persona podría considerarse administrador de hecho, pero es relevante diferenciarlo del administrador oculto, aquel que ejerce influencia decisiva sobre un administrador que sí que ostente oficialmente el cargo. El Informe Aldama⁷⁸ hace referencia precisamente a estos administradores ocultos, indicando que también deberían estar sujetos al deber de lealtad a la sociedad, ya que son parte necesaria para que un administrador actúe de una forma determinada⁷⁹. Estos administradores, sin ocupar el cargo formalmente ni de forma aparente, pueden haber ejercido en realidad las competencias y haber participado activamente en la gestión de la sociedad como si de un administrador se tratase⁸⁰.

En definitiva, el administrador oculto coexiste con el administrador de derecho, en concreto, el administrador oculto sería “la persona que real y efectivamente ejerce las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo con un administrador de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en connivencia con él, el cual, *de facto*, se somete sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es preciso, las ejecuta formalmente firmando los pertinentes documentos”⁸¹. Es interesante reparar en la posibilidad de que este administrador oculto realmente haya querido serlo y monte un entramado para dirigir sin hacer oficial su identidad, mediante la técnica que podría denominarse administrador “en la sombra”⁸².

⁷⁸ Informe que propugnaba el incremento de la transparencia de forma voluntaria, en base a una mejora del gobierno corporativo de las sociedades (8 de enero de 2003) <http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/INFORMEFINAL.PDF>

⁷⁹ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 61.

⁸⁰ EMBID IRUJO, J. M. (2004): “La responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima tras la Ley de Transparencia”. *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Nº 80, p. 2400.

⁸¹ SAP de Barcelona de 1 de octubre de 2014.

⁸² GRIMALDOS GARCÍA, M. I. (2015): “La reciente...”. págs. 241-242. En referencia al término que proviene del Ordenamiento británico por “ser aquel país el origen del concepto y la terminología empleada -«administrador en la sombra» (shadow director). La Section 251(1) de la Company Act de 2006 dispone que «In the Companies Acts «shadow director», in relation to a company, means a person in

4.3 LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR OBLIGACIONES SOCIALES.

Una de las causas por las que debe tener lugar la disolución de las sociedades es la de pérdida patrimonial que reduzca el patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad del capital social. En este caso los administradores tienen unos deberes específicos tanto en el momento que esta circunstancia sucede (artículos 365 y 366 del TRLSC) como posteriormente (artículo 367 del TRLSC).

El capital social ha sido considerado desde siempre una garantía frente a los acreedores sociales, el patrimonio que la empresa tiene respalda de alguna forma sus posibles obligaciones frente a los terceros al poder utilizarlo como medio de pago si hubiera problemas de liquidez. La legislación trata de establecer normas específicas para evitar el riesgo de insolvencia y así lograr un menor daño a los acreedores⁸³.

Activar este mecanismo será responsabilidad de los administradores, que se consideran informados en todo momento de la situación de la sociedad, tal y como hacíamos referencia en su deber de información. En el caso de que la sociedad hubiera pasado ya al estado de insolvencia, será la legislación concursal la que se encargará de regir desde ese momento el funcionamiento, deberes y obligaciones de la sociedad concursada. En este mismo sentido, la legislación introducida en 2011 en materia de derecho concursal, especifica que en una sociedad concursada los acreedores no podrán solicitar el pago en caso de incumplimiento de obligaciones por parte de los administradores (Art. 50 y ss. Ley Concursal, en adelante LC).

En el caso que tratamos, el de pérdidas graves y que dejan el patrimonio por debajo de la mitad de la cifra de capital, los administradores tienen el deber de convocar una junta

accordance with whose directions or instructions the directors of the company are accustomed to act». Sobre la figura en aquel sistema, vid. HOBSON, M. D., «The Law of Shadow Directorships», *Bond Law Review* , Vol. 10, Iss. 2, Article 4, 1988, pp. 184-212; BOURNE, N., *Principles of Company Law* , Cavendish Publishing, London, 1998, p. 117; MOORE, C., «Obligations in the Shade: The Application of Fiduciary Director's Duties to Shadow Directors», SSRN, August 30, 2014”.

⁸³ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 249-256.

general. Principalmente este mecanismo es proporcionado con objeto de conseguir determinar una medida que sea lo menos perjudicial posible para los acreedores de la sociedad.

La pregunta que debemos hacernos es el momento en el que se debe convocar esta junta. Exactamente este instante se dará justo cuando los administradores conozcan el desequilibrio patrimonial presente en la sociedad, de hecho, a partir de este mismo momento dará comienzo el plazo para la convocatoria de la junta.

Nos encontramos también ante otro problema relevante que merece la pena ser comentado, el concepto de pérdidas. ¿Debemos tener en cuenta pérdidas producidas en cualquier momento a lo largo del ejercicio o sólo las que figuren en las cuentas anuales ya cerradas? En este sentido la legislación (Art. 363.1.e TRLSC) propone contabilizar únicamente aquellas derivadas de la correcta valoración mediante las cuentas anuales ya cerradas, puesto que durante el ejercicio es evidente que no en todos los momentos se obtienen beneficios⁸⁴.

Es interesante destacar que los administradores, siempre que concurra causa de disolución, deberán convocar una junta para adoptar allí el acuerdo de disolución de la sociedad, con base en el artículo 365 del TRLSC. Además otro deber que la Ley impone a los administradores es, en el caso de que en la junta el acuerdo no fuera de disolución o fuese imposible lograrlo, se deberá pedir la disolución judicial de la sociedad y además les da un plazo de 2 meses desde el día que se celebró o se debía haber celebrado la junta (Art. 367 TRLSC).

La extinción de estos deberes se producirá o bien cuando ya hubieran sido satisfechos y los administradores hubieran convocado la junta, instado la disolución o realizado la petición de disolución judicial, según sea el caso, o bien si las condiciones iniciales que creaban esta situación desapareciesen. Estas condiciones podrían verse modificadas por la obtención de beneficios, ampliación de capital con la consiguiente entrada de activos en la empresa, reducciones de capital o incluso la denominada operación acordeón, así

⁸⁴ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 258-263.

mismo deja de existir causa de disolución de la sociedad cuando ésta definitivamente se declara insolvente y debe concurrir definitivamente a un concurso de acreedores⁸⁵.

4.4 LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES EN EL ÁMBITO CONTABLE

Con base en el artículo 25.2 del Código de Comercio (en adelante Ccom), todo empresario tiene el deber de llevar una contabilidad de la sociedad. Además remarca la Ley que es necesario elaborar balances e inventarios, para que en cualquier momento se pueda comprobar el estado actual de la sociedad. Podríamos ligar esto con lo explicado anteriormente, pues para el empresario es necesario saber en todo momento el estado patrimonial de su sociedad.

En el caso de las sociedades mercantiles, al tratarse de una persona jurídica, este deber lo ejercerán los administradores de forma directa o bien a través de autorizados que se dediquen a la llevanza de la contabilidad.

En realidad no existen sanciones generales directas para el incumplimiento de este deber que se considera obligatorio de todo empresario, pero sí que figuran graves sanciones indirectas si hubiese un concurso de acreedores, que es cuando se podría verificar este defecto en la contabilidad. En este caso la Ley considera que los libros deberían haber estado en todo momento redactados conforme a lo que Ley (Ccom) y las Leyes contables (NIIF y NIC, aplicables a sociedades) determinan para poder observar en todo momento el estado patrimonial puesto que es así como se podría observar los motivos que lo han llevado a la situación de concurso y determinar las causas con pruebas materiales⁸⁶.

En el caso de entidades con legislación específica como pueden ser las entidades de crédito, la Ley determina sanciones muy graves para los administradores. Estas sanciones serían de aplicación en el caso de falta de llevanza de la contabilidad exigida legalmente o aunque se llevase, se realizara irregularmente. El objetivo es que las sociedades en general y en especial en estos casos, se debe conocer en todo momento la

⁸⁵ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 267-269.

⁸⁶ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 415-416.

situación patrimonial o financiera, puesto que son sociedades consideradas estratégicas que podrían provocar una caída en escalera al ser muchas dependientes de ellas.

En un concurso de acreedores, podemos encontrarnos con la calificación de concurso fortuito o culpable (Art. 163.1 LC). Cabe destacar que no toda falta en el deber de llevanza de contabilidad puede llevar a que el concurso sea declarado culpable. La falta debería ser grave, calificada así como incumplimiento total de conocer la situación de la entidad en el momento que son requeridos los libros de cuentas. De hecho existe obligación de presentar estos libros para su legalización y esta legalización implica no poder alterar posteriormente los asientos que había ya registrados después del cierre contable⁸⁷.

El RM tiene, entre sus funciones, la de la legalización de los libros de contabilidad, según el artículo 329 del RRM incluso determina que los libros deberán numerarse y estar encuadrados, para evitar la introducción posterior de asientos contables intermedios que pudieran alterar lo ya registrado.

En una STS⁸⁸ encontramos la referencia a que no sólo por tener los libros e incluso tenerlos registrados ya se ha cumplido este deber, sino que se debe proceder también al correcto uso de ellos en cuanto a anotar todas las operaciones que la contabilidad requiera. Además no bastará con depositar las cuentas anuales en el RM al finalizar el ejercicio si estas no pueden ser comprobadas mediante la contabilidad interna de la sociedad en sus libros contables, libros que deberán ser los legalmente obligatorios, es decir, no bastará con archivos informáticos como Excel o Contaplus⁸⁹ para redactar esta contabilidad así como tampoco la existencia de facturas u otros documentos. La idea es que en todo momento se pueda seguir el rastro de cobros y pagos en la sociedad de forma clara y ordenada y registrada conforme a la Ley⁹⁰.

⁸⁷ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 417-419.

⁸⁸ V. SSTs de 8 de octubre de 1974, 20 de mayo de 1975, en la que relata el caso concreto de una sociedad en la que no se hicieron anotaciones en libros contables durante años.

⁸⁹ Programa de contabilidad especialmente diseñado para pymes y autónomos.

⁹⁰ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 420-421.

No se debe terminar esta explicación sin hacer mención a un hecho relevante actualmente que hemos observado en numerosos partidos políticos y que puede suceder también en el ámbito empresarial: la existencia de una doble contabilidad. Esta contabilidad suele tener por objetivo ocultar de algún modo la contabilidad real, que es aquella en la que sí que estarían registrados todos los movimientos con las correctas identificaciones, de la contabilidad que se presenta oficialmente de forma posterior. Este hecho es considerado una elusión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin embargo una sentencia actual⁹¹ deja claro que no se puede incurrir en esta elusión si no existiera cumplimiento del primer deber, la llevanza de una contabilidad, aunque se ha de tener claro lo que las STS determinan, que la llevanza de una doble contabilidad en todo caso tiene ánimo de defraudar⁹².

4.5 EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES DE CAPITAL

El riesgo asociado a ser administrador de una sociedad en cuanto a las numerosas obligaciones y deberes que existen en la actualidad, hace pensar que quizá el cargo pudiera no ser aceptado por personas que realmente serían óptimas para desarrollar esta labor. La existencia de un seguro de responsabilidad civil podría incentivar de algún modo las aceptaciones o por lo menos proporcionar un sistema para cubrir las posibles sanciones que surgieran en caso de incumplimiento. Inicialmente a finales del siglo XIX, cuando la propuesta se planteó no tuvo éxito pero hay en países como Estados Unidos donde la implantación de esta propuesta sí que ha calado, aunque todavía no lo haya hecho en Europa. Lo cierto es que la idea es interesante en cuanto a proporcionar seguridad en la aceptación del cargo de administrador⁹³.

⁹¹ SJM núm. 3 de Pontevedra, sede Vigo, de 15 de julio de 2011.

⁹² AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 421-422. En referencia a STS de 30 de enero de 1991: “toda doble contabilidad tiene por finalidad el ánimo defraudatorio”.

⁹³ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 653-654. Encontramos una ampliación de estas referencias históricas y su evolución en PÉREZ CARRILLO, E. F. (2005): *Aseguramiento de la responsabilidad de los administradores y altos ejecutivos sociales*. Ed. Marcial Pons, Madrid.

La evolución de este seguro como instrumento para facilitar la reducción del riesgo inherente al cargo de administrador ha ido de la mano de la aparición de nuevas normativas que aplicaban mayores cargos de responsabilidad. En España encontramos su aparición precisamente tras la reforma de la LSA de 1989, que mejoraba lo dispuesto conforme al ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores.

Quizá asociada a la aparición y contratación de este seguro, existe una cierta tendencia a elevar las cuantías de las sanciones o a tratar de hacer por todos los medios posibles responsable al administrador, pues si está cubierto por un seguro, garantizaría de algún modo el cobro de lo debido. Esto implica que las aseguradoras deben tener un cuidado extremo al valorar el riesgo asociado a determinada persona y cargo y quizá por todo ello inicialmente hubo un gran freno a la expansión de esta modalidad de seguro.

La existencia de un administrador asegurado en ningún caso elude la posible responsabilidad que a este se le confiere. El seguro simplemente valdrá para cubrir y resarcir de algún modo las consecuencias económicas frente a la sociedad o los terceros, pero el administrador seguirá siendo responsable legalmente, es decir, si bien la responsabilidad quedará “pagada” o compensada de algún modo mediante el seguro, el administrador no eludirá su responsabilidad penal por el hecho de tener seguro.

En el contrato de seguro tendremos al asegurador, que será una entidad apta para el ejercicio de la actividad aseguradora, es decir, deberá disponer de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora. La entidad podrá domiciliarse en España así como en países miembros de la Unión o en terceros países siempre y cuando se cumpla la legislación vigente. El tomador podrá ser tanto la sociedad, que contratará el seguro para cubrir a una persona concreta, como el propio administrador para cubrirse a sí mismo. Como Antonio Roncero redacta, pueden existir ciertos problemas contractuales si tomador y asegurado no son la misma persona⁹⁴.

⁹⁴ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 655-668.

El asegurado será “el sujeto cuyo patrimonio se vería gravado como consecuencia del nacimiento de una deuda de responsabilidad” en virtud de lo que indica Sánchez Calero⁹⁵.

La cobertura del seguro vendría ligada a la aparición de una deuda con carácter de indemnización surgida como consecuencia de la responsabilidad civil del administrador, es decir, del asegurado, aunque hay seguros que no se limitan únicamente a la cobertura de cuantías (responsabilidad económica) sino que también cubren la defensa del asegurado en caso de juicio, es más, esta defensa se incluye junto al seguro de responsabilidad civil salvo pacto en contrario, en virtud del artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro (en adelante LCS).

En el contrato de seguro de responsabilidad civil figurarán concretamente las clases de riesgos que se cubren así como aquellos que no estuvieran cubiertos con cláusulas limitativas. Estas exclusiones y limitaciones, por tanto, no vincularán con el pago a la entidad aseguradora, sino que estos riesgos correrán por cuenta del asegurado al no venir cubiertos en la póliza. En un principio las partes contratantes podrán establecer las limitaciones que deseen en el contrato, siempre sabiendo que a mayor cobertura será lógico el pago de una mayor prima. Existirán supuestos por Ley que limiten dichas cláusulas o que exijan al menos una serie de condiciones mínimas a este tipo de seguros, aunque, tal y como redacta el artículo 3 de la LCS, las cláusulas incluidas en el contrato siempre deberán ser claras y precisas⁹⁶.

Queremos hacer una especial mención en este sentido a las posibles cláusulas incluidas que por su poca frecuencia podrían ser consideradas “sorprendentes”, que deberán ser sometidas a los requisitos de validez que la Ley exija, ya que podrían limitar de algún modo los derechos del asegurado si en su redacción no se diera a entender exactamente los riesgos cubiertos y aquellos que no lo están⁹⁷.

⁹⁵ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 668. En referencia a SÁNCHEZ CALERO, F. *Ley*. Pp. 1129 y ss.

⁹⁶ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 675-678.

⁹⁷ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 679.

4.6 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD

En el derecho español existen dos formas de reclamar la responsabilidad por daños a los administradores, en el primer caso se encuentra la sociedad, que puede reclamar por daños realizados al propio patrimonio de la sociedad aunque también podrían reclamar esta acción social los socios y los acreedores. Por otro lado, está la acción individual de responsabilidad, que sería la reclamación por daños causados directamente en el patrimonio de los socios o terceros⁹⁸.

4.6.1 Acción social de responsabilidad: Ejercicio por la sociedad

La acción social de responsabilidad (Art. 238 TRLSC) tiene por objeto proteger a la sociedad de los daños causados por los actos u omisiones de los administradores, contrarios a la Ley o los estatutos de la sociedad, es decir, los daños que hubieran causado los administradores directamente a la sociedad mercantil, aunque es importante, en virtud de lo indicado en la jurisprudencia⁹⁹, que estos daños deben ser consecuencia identificable de las acciones u omisiones de los administradores. De hecho se deberá poder demostrar la culpa del administrador así como cuantificar en qué medida el acto realizado por el administrador ha contribuido en dicho daño con objeto de determinar el alcance exacto de su responsabilidad¹⁰⁰.

La sociedad, como hemos comentado, tendrá facultades para ejercer esta acción de responsabilidad pero también la tendrán los accionistas y los acreedores, ya que de alguna forma la garantía de cobro o de que sus acciones tienen un determinado valor y no otro se encuentra en la existencia de un determinado patrimonio en la sociedad, por tanto, cualquier disminución del mismo mermará su capacidad de cobro posterior o la

⁹⁸ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 89.

⁹⁹ Así podemos citar, por ejemplo, las SSTs 4.11.1991 y 21.5.1992, y también las SAP Teruel 10.4.2000, SAP Murcia 1.9.2000 o SAP Asturias 31.3.2003.

¹⁰⁰ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 90-91.

valoración de sus acciones y entonces estos también tendrán derecho a ejercer esta acción de responsabilidad¹⁰¹.

4.6.2 Acción individual de responsabilidad

Encontramos la acción individual de responsabilidad (Art. 241 TRLSC) como la segunda posibilidad para ejercer el derecho al resarcimiento del daño causado, en este caso por daños causados directamente en el patrimonio de los socios o terceros. Esta indemnización, por tanto, buscaría reintegrar el patrimonio perdido del socio o acreedor que realiza la demanda. Es importante destacar que la acción individual de responsabilidad no está reconocida para reclamar de forma individual aquél daño que se ha producido en la parte proporcional a las acciones o participaciones que pudiéramos tener del patrimonio de la sociedad.

Necesitamos entonces identificar los supuestos que pueden aplicar esta acción de responsabilidad. La clasificación propuesta por Esteban Velasco, G. es de las encontradas quizá la más explicativa:

- a) La lesión de los intereses de terceros que no tengan relación previa con la sociedad. “Ilícitos de empresa”. Imaginemos que la sociedad, en el ejercicio de su actividad, lesionara bienes, salud o incluso mermara la libertad de los otros. Puede considerarse en este sentido delitos contra la salud pública como introducción de productos defectuosos en el mercado y no proceder a su retirada, competencia desleal, ataques a la propiedad industrial,...

Siempre es importante que exista, como comentábamos anteriormente, un vínculo causal entre la acción del administrador y el daño, pues el objetivo no es que el administrador sea garantía frente a cualquier supuesto que perjudicase a los otros. Lo será únicamente si como consecuencia de su acción u omisión se ha producido este daño.

- b) Lesión de los intereses de los socios por intromisión ilícita en las relaciones societarias del socio con la sociedad. La privación de la condición de socio, negación o privación de los derechos económicos que como socio debería tener

¹⁰¹ AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. p. 91.

perjudicando así el valor de sus acciones o participaciones: podrían considerarse aquí no únicamente no pagar dividendos, sino privar de voto, de acceso a la Junta general, no facilitar información cuando se tuviera la obligación de hacerlo, no informar del derecho de suscripción preferente, registrar esas acciones o participaciones a nombre de otro socio diferente del titular,...

En esta apartado se consideran entonces todos aquellos supuestos que provengan de infracciones de los deberes que como administrador tiene, bien sea porque así lo fija la ley o bien los estatutos.

- c) Supuestos de intromisión lesiva en el proceso de formación de la voluntad del tercero-acreedor (o del socio). Esta clasificación se refiere al poder que ostentan los administradores en cuanto a representantes de la sociedad. El proceso de decisión en cuanto a acciones y participaciones o incluso contratos de la sociedad con terceros pueden verse modificados en gran medida por la influencia del administrador. Esta clasificación representa la inclusión de información falsa que sea clave en la toma de una determinada decisión por parte del socio o tercero, omitir los deberes en caso de disolución o concurso o incluso no facilitar información de que la sociedad esté en liquidación o sea insolvente y que esto produzca una contratación lesiva o dañosa a los terceros.
- d) Supuestos de intromisión lesiva en la fase de ejecución de las relaciones existentes entre la sociedad y los terceros acreedores. Estos supuestos serían los relativos a cualquier daño derivado de la actuación del administrador que no permitiera el correcto desarrollo de una relación entre la sociedad y los terceros, como podrían considerarse dar una orden de no efectuar una obligación (con el fin de causar daño a este acreedor), daños sobre bienes que con dolo o culpa se hacen desaparecer o deteriorarse y servirían como medio de pago al acreedor, lesiones a derechos de propiedad o daños físicos al acreedor o por último el incumplimiento u omisión de los deberes en las disoluciones y concursos y el posterior daño causado a los acreedores por estos hechos.

- e) Responsabilidad en los grupos de sociedades o relaciones matriz-filial-acreedores. Sobre todo referida a la lesión directa al patrimonio de una sociedad dependiente de esta siempre y cuando el daño se origine de actuaciones de los administradores de la sociedad dominante. O bien tenemos el caso de daño producido por la empresa filial hacia la matriz por incumplimiento de las instrucciones que la dominante había impartido¹⁰².

¹⁰² Apartado redactado conforme a lo visto en AAVV (ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. directores) (2013): *La responsabilidad...* cit. pp. 162-226. Es muy recomendable la lectura en profundidad para conocer STS en relación con cada uno de los supuestos citados.

5. CONCLUSIONES

Habiendo determinado como objetivo del trabajo el mayor conocimiento sobre uno de los campos en los que es probable desarrollar como graduado en Administración y Dirección de Empresas en un futuro próximo su actividad profesional: la administración de una sociedad, se ha realizado una visión general de los administradores, para concretar después nuestro estudio en el aspecto concreto de su responsabilidad. La formación académica de todo graduado en Administración y Dirección de Empresas debería constar de elementos suficientes como para conocer lo más relevante sobre las funciones, deberes propios del cargo y, sobre todo, la responsabilidad que se asocia a cada una de las acciones u omisiones que en el ejercicio de esa tarea pudieran tener lugar

Partiendo desde lo más general, con la inclusión de las definiciones de administración y responsabilidad, hasta concretar luego en la administración de las sociedades de capital en particular, sobre todo, se ha intentado dar una visión lo más práctica posible de cara a conseguir un complemento formativo que ayude en el desempeño posterior de la actividad laboral. Siempre que ha sido posible, hemos puesto de manifiesto la relación entre la legislación y los conceptos económicos que ayuden a entender mejor el objetivo de cada uno de los artículos incluidos en las diversas leyes que se han utilizado.

Consideramos que los objetivos que nos habíamos planteado al realizar este trabajo han sido cumplidos, puesto que, además de un adecuado estudio y manejo de la legislación vigente, se ha consultado e incorporado la opinión de la mejor doctrina mercantilista así como la jurisprudencia aplicable, consiguiendo extraer conclusiones e información relevante que han apoyado la teoría en la práctica mediante la aplicación de lo que la ley recoge para poder conseguir comprender mejor cada uno de los preceptos.

Como limitaciones quizá la única encontrada es la falta de la suficiente formación jurídica para comprender algunos conceptos o fundamentos por los que se desarrolla la legislación.

Entendemos que la principal aplicabilidad de este estudio va dirigida a intentar delimitar el ámbito de la responsabilidad asociada al cargo de administrador, interpretando la

regulación actual en materia de derecho de sociedades tras la modificación de la Ley 31/2014. Observamos que, con el paso del tiempo y a través de las sucesivas modificaciones legislativas, se ha ido atribuyendo una mayor responsabilidad a los administradores para, de algún modo, conseguir que el ejercicio de sus deberes y obligaciones siempre se dirija a tomar la mejor decisión para la sociedad y para no dejar desprotegidos a los terceros que tengan relación con la sociedad.. En este sentido y a medida que la carga de responsabilidades se incrementa, van tomando mayor protagonismo los seguros de responsabilidad civil, para cubrir las consecuencias económicas derivadas de incumplimiento de las obligaciones que implica esa responsabilidad y para lograr así disminuir en parte el riesgo asociado al desempeño de este cargo.

Este estudio puede servir como lectura a los futuros graduados que deseen profundizar en el conocimiento de las cuestiones objeto de nuestro estudio. Quizá pueda ser utilizado por aquellas personas que, en una lectura no muy extensa, deseen obtener una visión sobre las últimas reformas llevadas a cabo en materia de legislación sobre sociedades mercantiles, como pueden ser los casos del nuevo administrador de hecho o el administrador oculto.

Valorando el trabajo desarrollado, habiendo consultado numerosas fuentes, comparativas de legislación antigua con la nueva, informes que posteriormente han sido utilizados para elaborar legislación mejorada (como el Informe Aldama o el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas) y comentarios a la ley de los principales autores en la materia, en mi opinión, me siento sobre todo satisfecho al haber conseguido utilizar esta posibilidad que nos brinda nuestra titulación mediante la realización del trabajo de fin de grado a modo de expansión en mi formación en lo que a materia de Derecho de empresa se refiere. Además, recomiendo la lectura de la bibliografía citada, ya que contiene muchos casos prácticos y ampliación sobre los temas tratados en este trabajo.

6. BIBLIOGRAFÍA

AAVV (MENENDEZ, A; ROJO, A. directores) (2014): *Lecciones de Derecho Mercantil*. Vol. I. Ed. Civitas, Navarra.

AAVV (MONTOLYA MELGAR, A. director) (1995): *Enciclopedia Jurídica Básica*, vol. I. Ed. Civitas, Navarra.

CASANOVA CLAROS, M. (2014): “Empresa y responsabilidad: alcances”. *Vox Juris*, Vol. 27, Nº. 1, pp. 17-33.

EMBED IRUJO, J. M. (2004): “La responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima tras la Ley de Transparencia”. *Revista crítica de derecho inmobiliario*, Nº 80, pp. 2379-2416.

ESTUPIÑÁN CÁCERES, R. (2014): “El deber del administrador de abstenerse de aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad: configuración e incidencia de su infracción en la calificación del concurso y en la responsabilidad concursal”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 43, pp. 175-207.

FRANCH FLUXÀ, J. (2015): “Breve comentario a las últimas reformas societarias introducidas por Ley 31/2014”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 44, pp. 389-400.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, R. (2013): “Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas”. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, Nº. 46, pp. 203-214.

GRIMALDOS GARCÍA, M. I. (2015): “La reciente redacción del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital ¿Nuevos presupuestos? ¿Nuevos responsables?”. *Revista de derecho de sociedades*, Nº 44, pp. 233-259.

IGARTUA ARREGUI, F; JUSTE MENCÍA, J. (2005): “Deberes de los administradores (reforma de la LSA por la Ley de Transparencia)”. *Revista de derecho de sociedades*, N° 24, pp. 75-89.

LATORRE CHINER, N. (2009): “Administrador de hecho y apoderado general (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2008)”. *Revista de derecho de sociedades*, N° 32, pp. 389-398.

LLEBOT MAJÓ, J. O. (1996): *Los deberes de los administradores de la Sociedad Anónima*. Ed. Civitas, Madrid.

PÉREZ CARRILLO, E. F. (2005): *Aseguramiento de la responsabilidad de los administradores y altos ejecutivos sociales*. Ed. Marcial Pons, Madrid.

PORTELLANO DÍEZ, P. (1996): *Deber de fidelidad de los administradores mercantiles y oportunidades de negocios*. Ed. Civitas, Madrid.

QUIJANO GONZÁLEZ, J. (1989): *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima*. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid.

QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2015): “Los presupuestos de la responsabilidad de los administradores en el nuevo modelo del Consejo de Administración”. *Revista de derecho mercantil*, N° 296, pp. 135-157.

RAMOS HERRANZ, I. (2015): “El deber de abstenerse de usar el nombre de la sociedad o la condición de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas”. *Revista de derecho de sociedades*, N° 44, pp. 303-332.

RIBAS FERRER, V. (2012): “Deberes de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital”. *Revista de derecho de sociedades*, N° 38, pp. 73-154.

ROJO, A; BELTRÁN, E; CAMPUZANO, A. (2013): *La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

SÁNCHEZ CALERO, F. (2007): *Los administradores en las sociedades de capital*. Ed. Aranzadi, SA, Navarra.

Referencias web:

Centro de información y red de creación de empresas (CIRCE):

http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?titulo=tipos_sociedades

Código Civil:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html

Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas:

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/Codigo_buen_gobierno.pdf

Código de Comercio:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.html

Informe Aldama:

<http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/INFORMEFINAL.PDF>

Ley Concursal:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/122-2003.html

Ley de Contrato de Seguro

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/150-1980.html

Ley del Mercado de Valores:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/124-1988.html

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22.^a Edición. 2012.

Enlaces consultados:

<http://lema.rae.es/drae/?val=administrador>

<http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad>

<http://lema.rae.es/drae/?val=diligente>

<http://lema.rae.es/drae/?val=confidencial>

Registradores mercantiles de España (datos estadísticos del anexo):

<http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/>

https://www.registradores.org/estaticasm/Estadistica/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

<https://www.registradores.org/estaticasm/Estadistica/2015/junio/paginas/constituciones.htm>

Reglamento del Registro Mercantil:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1784-1996.html

Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (citado como LSA):

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-rdleg1564-1989.html

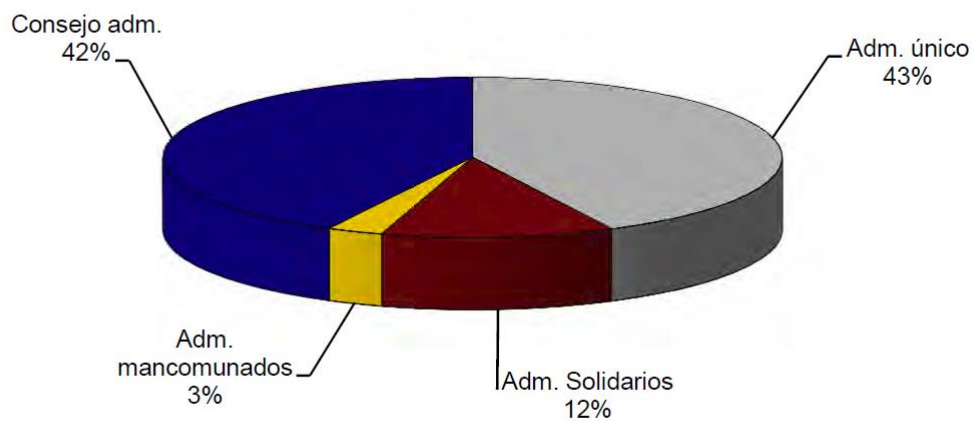
Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t1.html

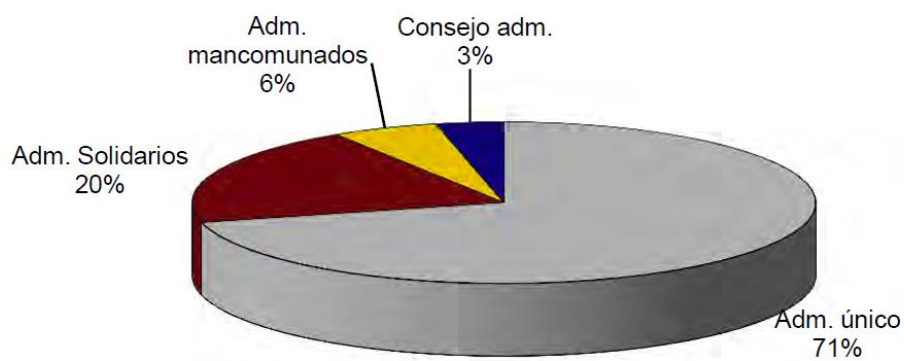
7. ANEXO

Órganos de administración. Distribución por forma social. Nacional. Ejercicio 2014.
Datos facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en su informe de estadística mercantil del ejercicio 2014.

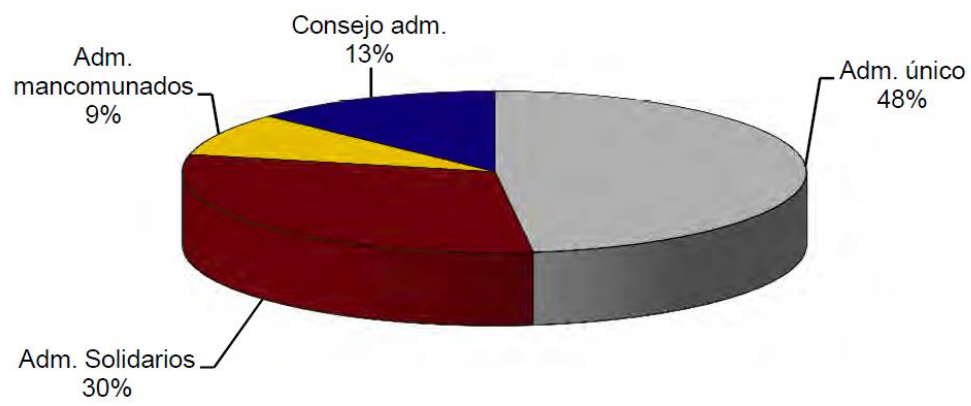
Sociedades Anónimas



Sociedades Limitadas



Otras formas sociales



Información actualizada sobre depósitos de cuentas y constituciones de sociedades del ejercicio 2015, para observar las sociedades en funcionamiento y sus formas jurídicas. Para mejor visualización, consultar directamente las estadísticas Junio 2015.

22/9/2015

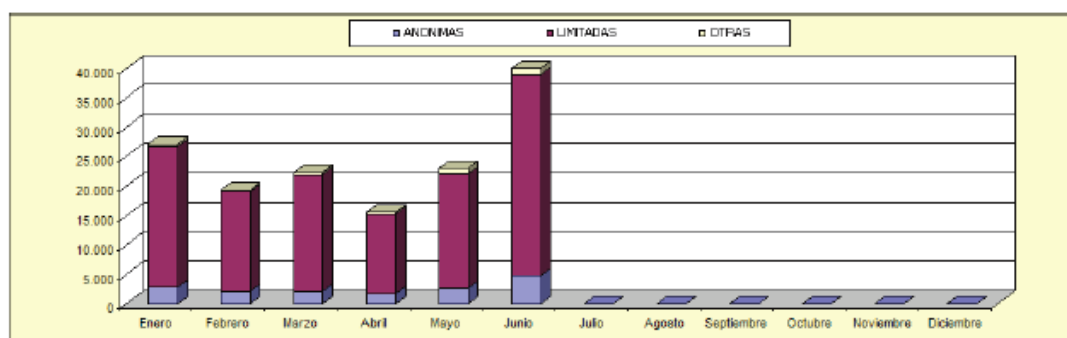
https://www.registradores.org/estaticasm/Estadistica/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

Depósitos de cuentas

Nacional

Ejercicio 2015

Mes	Totales	ANONIMAS		LIMITADAS		OTRAS	
		Número	Deembolsado	Número	Deembolsado	Número	Deembolsado
Enero	27.086	2.725		24.011		359	
Febrero	19.324	2.064		16.973		287	
Marzo	22.291	2.049		19.803		349	
Abril	16.642	1.740		13.458		344	
Mayo	22.927	2.544		19.364		1.019	
Junio	39.939	4.714		34.173		1.049	
Julio	0	0		0		0	
Agosto	0	0		0		0	
Septiembre	0	0		0		0	
Octubre	0	0		0		0	
Noviembre	0	0		0		0	
Diciembre	0	0		0		0	
Total 2015	147.829	16.837		127.782		3.497	

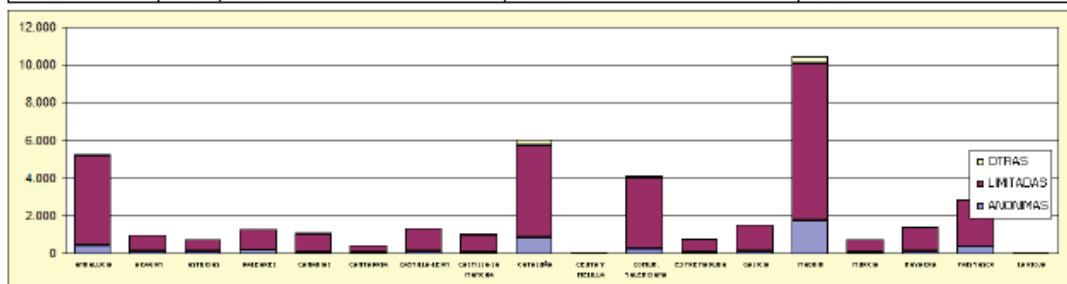


Depósitos de cuentas

Autonomías

Junio 2015

AUTONOMIA	Totales	ANONIMAS		LIMITADAS		OTRAS	
		Número	Deembolsado	Número	Deembolsado	Número	Deembolsado
ANDALUCIA	6.286	417		4.777		71	
ARAGON	978	95		862		21	
ASTURIAS	716	115		593		7	
BALEARES	1.279	167		1.102		10	
CANARIAS	1.059	88		965		6	
CANTABRIA	398	31		366		1	
CASTILLA-LEON	1.341	126		1.177		38	
CASTILLA-LA MANCHA	996	65		912		18	
CATALUÑA	8.033	823		4.899		311	
CEUTA Y MELILLA	37	3		34		0	
COMUN. VALENCIANA	4.086	264		3.738		83	
EXTREMADURA	787	61		673		33	
GALICIA	1.637	122		1.395		20	
MADRID	10.462	1.771		8.281		400	
MURCIA	712	69		635		8	
NAVARRA	1.384	139		1.253		2	
PAIS VASCO	2.826	351		2.454		20	
LA RIOJA	84	7		57		0	
TOTALES	39.939	4.714		34.173		1.049	



Depósitos de cuentas

Provincias

Junio 2015

https://www.registradores.org/estaticasm/Estadistica/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

1/4

PROVINCIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
ALAVA	304	43			260			1		
ALBACETE	370	16			351			3		
ALICANTE	1.353	76			1.239			38		
ALMERIA	450	22			421			7		
AVILA	46	3			43			0		
BADAJOS	691	52			614			25		
BALEARES	1.279	167			1.102			10		
BARCELONA	4.667	677			3.683			307		
BURGOS	146	15			131			2		
CACERES	176	9			159			8		
CADIZ	374	49			325			0		
CASTELLON	450	35			402			13		
CIUDAD REAL	149	8			136			5		
CORDOBA	554	53			499			2		
LA CORUÑA	547	42			493			12		
CUENCA	141	7			130			4		
GERONA	532	92			439			1		
GRANADA	429	40			386			22		
GUADALAJARA	105	14			94			1		
GUIPUZCOA	969	105			861			3		
HUELVA	135	26			109			0		
HUESCA	249	10			237			2		
JAEEN	289	19			266			0		
LEON	250	40			225			25		
LERIDA	524	21			502			1		
LA RIOJA	64	7			57			0		

Depósitos de cuentas

Provincias

Junio 2015

PROVINCIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
LUGO	145	8			132			5		
MADRID	10.452	1.771			8.261			400		
MÁLAGA	1.864	102			1.530			32		
MURCIA	712	69			635			8		
NAVARRA	1.394	139			1.253			2		
ORENSE	176	13			162			1		
ASTURIAS	715	115			593			7		
PALENCIA	44	5			33			6		
LAS PALMAS	489	49			434			2		
PONTEVEDRA	669	59			606			2		
SALAMANCA	217	19			197			1		
TENERIFE	574	39			531			4		
CANTABRIA	396	31			366			1		
SEGOVIA	94	7			76			1		
SEVILLA	1.375	106			1.261			8		
SORIA	5	0			5			0		
TARRAGONA	310	33			275			2		
TERUEL	60	4			55			1		
TOLEDO	226	20			201			5		
VALENCIA	2.362	153			2.097			32		
VALLADOLID	374	30			343			1		
VIZCAYA	1.552	203			1.333			16		
ZAMORA	133	7			124			2		
ZARAGOZA	669	61			570			16		
CEUTA	23	2			21			0		
MELILLA	14	1			13			0		
TOTALES	39.935	4.714	0	0	34.173	0	0	1.049	0	0

Depósitos de cuentas consolidadas

Autonomías

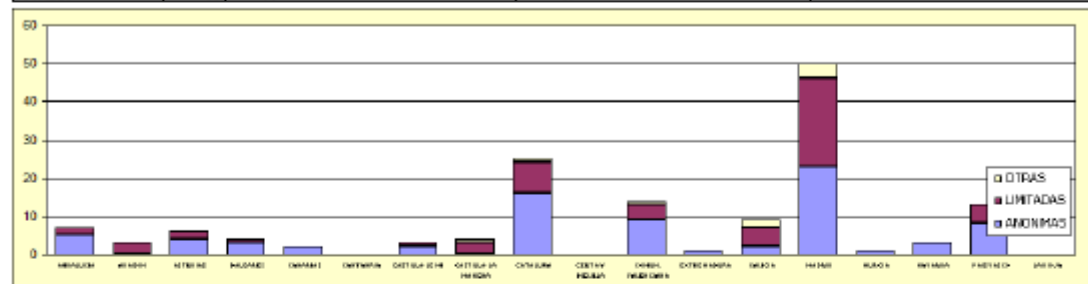
Junio 2015

AUTONOMIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
ANDALUCIA	7	5			2			0		
ARAGON	3	0			3			0		
ASTURIAS	6	4			2			0		
BALEARES	4	3			1			0		
CANARIAS	2	2			0			0		
CANTABRIA	0	0			0			0		

22/9/2015

https://www.registradores.org/estadisticas/Estadistica/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

CASTILLA-LEON	3	2	1	0
CASTILLA-LA MANCHA	4	0	3	1
CATALUÑA	25	16	8	1
CEUTA Y MELILLA	0	0	0	0
COMUN. VALENCIANA	14	9	4	1
EXTREMADURA	1	1	0	0
GALICIA	9	2	5	2
MADRID	50	23	23	4
MURCIA	1	1	0	0
NAVARRA	3	3	0	0
PAIS VASCO	13	8	5	0
LA RIOJA	0	0	0	0
TOTALES	140	79	87	9

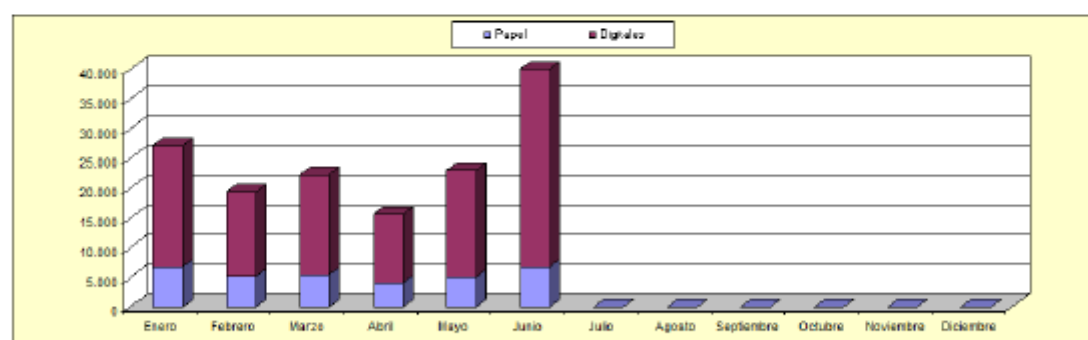


Depósitos de cuentas digitales

Nacional

Ejercicio 2015

Mes	Totales	ANONIMAS		LIMITADAS		OTRAS	
		Número	Desembolsado	Número	Desembolsado	Número	Desembolsado
Enero	20.419	1.877		18.380		162	
Febrero	14.210	1.385		12.701		124	
Marzo	16.820	1.434		15.296		150	
Abril	11.557	1.174		10.234		149	
Mayo	17.899	1.807		15.779		312	
Junio	33.187	3.247		29.590		350	
Julio	0	0		0		0	
Agosto	0	0		0		0	
Septiembre	0	0		0		0	
Octubre	0	0		0		0	
Noviembre	0	0		0		0	
Diciembre	0	0		0		0	
Total 2015	114.091	10.924		101.920		1.247	



Depósitos de cuentas digitales

Autonomías

Junio 2015

Depósitos de cuentas digitales

AUTONOMIA	Totales	ANONIMAS		LIMITADAS		OTRAS	
		Número	Desembolsado	Número	Desembolsado	Número	Desembolsado
ANDALUCIA	4.279	325		3.940		14	
ARAGON	823	64		747		12	
ASTURIAS	664	93		564		7	
BALEARES	999	106		888		5	
CANARIAS	809	61		746		2	
CANTABRIA	318	16		301		1	
CASTILLA-LEON	1.153	111		1.032		10	
CASTILLA-LA MANCHA	909	55		838		16	

https://www.registradores.org/estadisticas/Estadistica/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

3/4

22/9/2015

https://www.registradores.org/estadisticas/Estadística/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

CATALUÑA	4.929	561	4.277	91
CEUTA Y MELILLA	39	3	33	0
COMUN. VALENCIANA	3.889	243	3.585	60
EXTREMADURA	705	52	628	25
GALICIA	1.119	80	1.027	12
MADRID	8.083	1.005	6.999	79
MURCIA	569	51	514	4
NAVARRA	1.239	118	1.119	2
PAIS VASCO	2.604	298	2.298	10
LA RIOJA	61	5	56	0
TOTALES	33.183	3.247	29.590	359

Depósitos de cuentas digitales Provincias Junio 2015

Depósitos de cuentas digitales

PROVINCIA	Totales	Número	ANONIMAS	Número	LIMITADAS	Número	OTRAS
ALAVA	288	38		249		1	
ALBACETE	342	14		325		3	
ALICANTE	1.304	68		1.200		38	
ALMERIA	395	20		370		5	
AVILA	43	3		40		0	
BADAJOS	534	43		471		20	
BALEARES	999	106		888		5	
BARCELONA	3.860	437		3.135		88	
BURGOS	132	13		118		1	
CACERES	171	9		157		5	
CADIZ	332	44		288		0	
CASTELLON	427	31		390		6	
CIUDAD REAL	147	8		134		5	
CORDOBA	511	47		464		0	
LA CORUÑA	339	24		313		2	
CUENCA	129	4		118		4	
GERONA	489	81		404		1	
GRANADA	332	29		299		4	
GUADALAJARA	103	14		88		1	
GUIPUZCOA	940	98		841		3	
HUELVA	90	12		78		0	
HUESCA	249	9		238		2	
JAEN	252	14		238		0	
LEON	221	33		188		0	
LERIDA	510	22		488		0	
LA RIOJA	61	5		56		0	

Depósitos de cuentas digitales Provincias Junio 2015

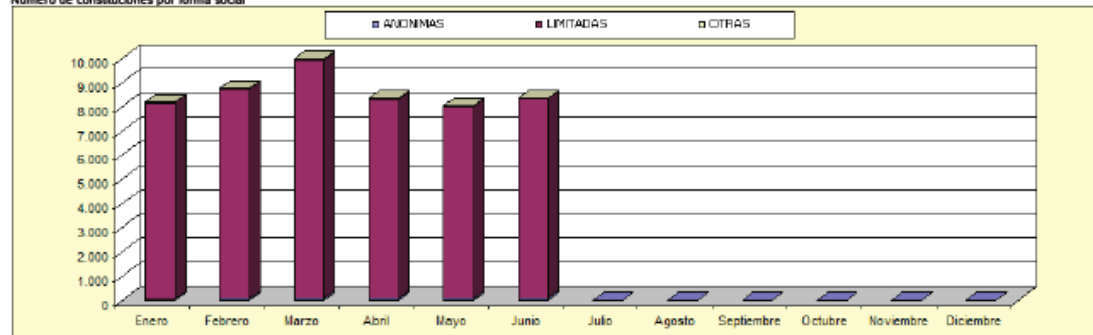
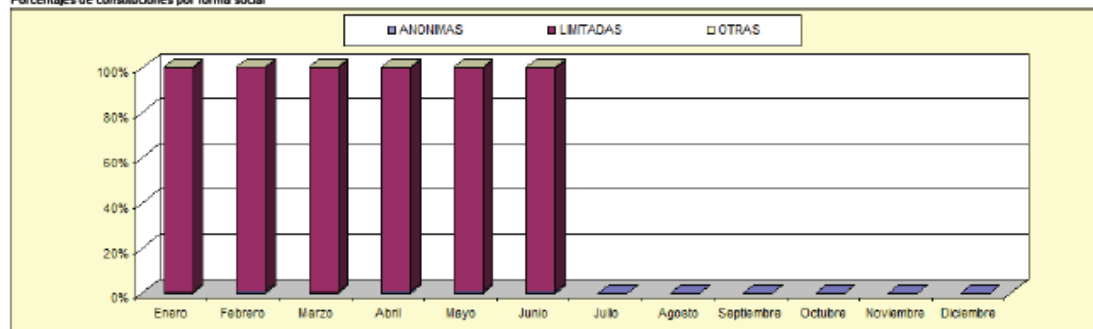
PROVINCIA	Totales	Número	ANONIMAS	Número	LIMITADAS	Número	OTRAS
LUGO	136	8		125		5	
MADRID	8.083	1.005		6.999		79	
MALAGA	1.301	74		1.227		0	
MURCIA	569	51		514		4	
NAVARRA	1.239	118		1.119		2	
ORENSE	153	9		141		3	
ASTURIAS	664	93		584		7	
PALENCIA	39	5		25		5	
LAS PALMAS	353	34		318		1	
PONTEVEDRA	489	39		448		2	
SALAMANCA	171	18		152		1	
TENERIFE	499	27		428		1	
CANTABRIA	318	16		301		1	
SEGOVIA	81	7		74		0	
SEVILLA	1.066	85		978		5	
SORIA	4	0		4		0	
TARRAGONA	273	21		250		2	
TERUEL	60	4		55		1	
TOLEDO	191	15		173		3	
VALENCIA	2.157	144		1.995		18	
VALLADOLID	347	29		317		1	
VIZCAYA	1.379	184		1.208		6	
ZAMORA	119	3		114		2	
ZARAGOZA	514	51		454		9	
CEUTA	23	2		21		0	
MELILLA	13	1		12		0	
TOTALES	33.183	3.247		29.590		359	

https://www.registradores.org/estadisticas/Estadística/2015/junio/paginas/depositos_de_cuentas.htm

4/4

Constituciones**Nacional****Ejercicio 2015****Capitales en constituciones (euros)**

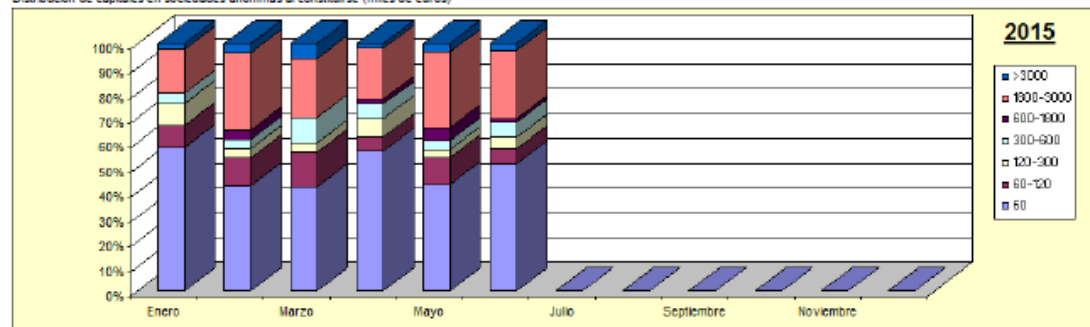
Mes	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
Enero	8.171	45	27.614.640	23.331.890	8.097	557.079.704	557.079.704	29	2.274.013	1.674.013
Febrero	8.738	54	332.915.336	312.848.581	8.655	497.548.807	497.548.807	30	417.143	417.143
Marzo	8.871	50	64.030.206	43.496.236	9.885	582.171.919	582.171.919	36	1.373.222	1.373.222
Abril	8.342	53	40.695.010	34.779.110	8.247	263.579.321	263.579.321	42	10.183.843	10.183.843
Mayo	8.690	56	57.977.360	54.723.790	7.937	400.649.310	400.649.310	37	24.353.033	24.353.033
Junio	8.347	66	127.925.230	126.440.695	8.246	256.236.759	256.236.759	35	707.320	262.320
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2015	61.800	324	861.167.782	696.820.803	61.087	2.667.286.820	2.667.286.820	209	39.308.674	38.283.674

Número de constituciones por forma social**Constituciones****Nacional****Ejercicio 2015****Porcentajes de constituciones por forma social****Medias de capitales en constituciones (euros)**

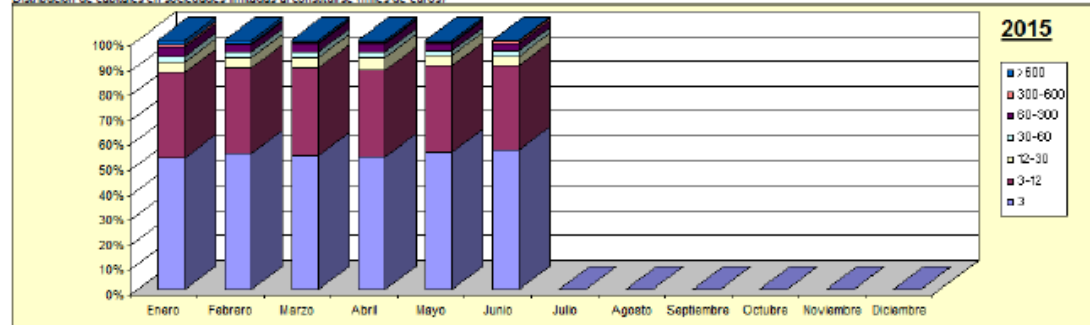
Mes	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
Enero	8.171	45	613.659	518.486	8.097	68.801	68.801	29	78.414	57.725
Febrero	8.738	54	6.165.099	5.793.492	8.655	57.487	57.487	30	13.905	13.905
Marzo	8.871	50	1.280.604	869.925	9.885	58.894	58.894	36	38.145	38.145
Abril	8.342	53	767.830	656.210	8.247	31.961	31.961	42	242.472	242.472
Mayo	8.690	56	1.035.310	977.211	7.937	50.479	50.479	37	658.190	658.190
Junio	8.347	66	1.938.261	1.915.768	8.246	31.074	31.074	35	20.209	7.495
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 2015	61.800	324	2.009.748	1.838.334	61.087	60.877	60.877	209	188.078	183.078

Constituciones**Nacional****Ejercicio 2015**

Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)



Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)

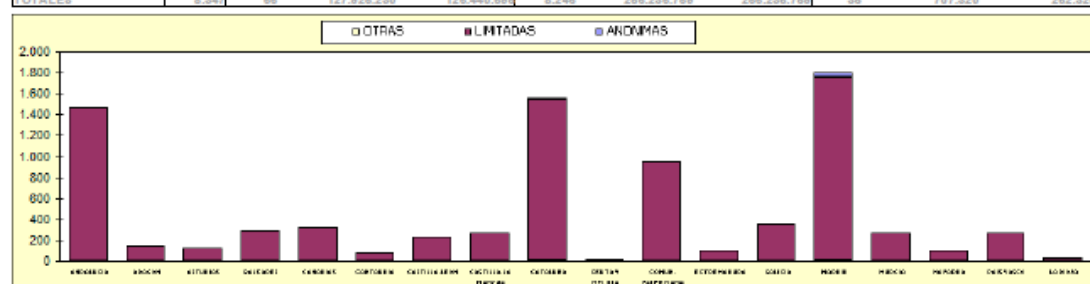


Constituciones

Autonomías

Junio 2015

AUTONOMIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
ANDALUCIA	1.487	2	3.400.000	3.100.000	1.462	42.870.586	42.870.586	3	169.100	169.100
ARAGON	148	1	399.200	399.200	147	2.518.688	2.518.688	0	0	0
ASTURIAS	122	1	60.000	60.000	121	2.643.409	2.643.409	0	0	0
BALEARES	288	1	60.000	15.000	285	5.988.724	5.988.724	0	0	0
CANARIAS	317	0	0	0	317	8.142.028	8.142.028	0	0	0
CANTABRIA	79	0	0	0	79	4.675.636	4.675.636	0	0	0
CASTILLA-LEON	236	1	60.000	15.000	234	8.533.965	8.533.965	0	0	0
CASTILLA-LA MANCHA	284	1	60.000	15.000	262	7.610.967	7.610.967	1	6.000	6.000
CATALUÑA	1.664	8	3.750.000	3.525.000	1.532	29.743.121	29.743.121	14	442.100	42.100
CEUTA Y MELILLA	21	0	0	0	21	150.118	150.118	0	0	0
COMUN. VALENCIANA	963	2	160.000	160.000	948	25.101.268	25.101.268	3	5.000	5.000
EXTREMADURA	87	0	0	0	97	4.911.560	4.911.560	0	0	0
GALICIA	362	1	60.000	60.000	348	12.354.484	12.354.484	3	2.600	2.600
MADRID	1.789	44	119.300.030	118.490.019	1.744	75.975.392	75.975.392	11	82.520	37.520
MURCIA	281	1	60.000	60.000	260	10.583.816	10.583.816	0	0	0
NAVARRA	86	1	90.000	90.000	94	797.895	797.895	0	0	0
PAIS VASCO	288	1	66.000	51.480	267	11.727.956	11.727.956	0	0	0
LA RIOJA	28	1	400.000	400.000	28	1.907.146	1.907.146	0	0	0
TOTALES	8.347	88	127.826.230	126.440.880	8.248	268.238.769	268.238.769	35	707.320	282.320

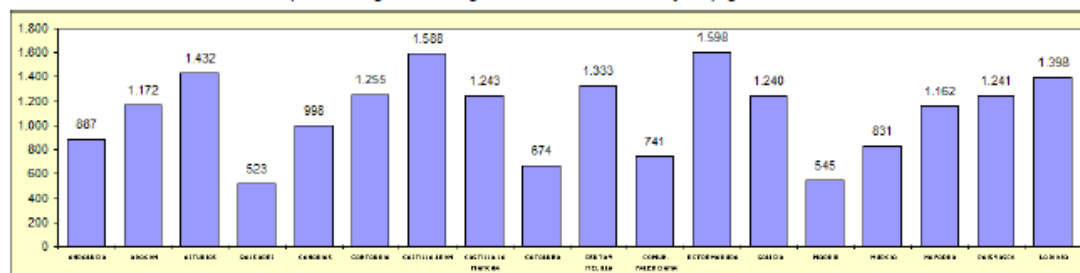


Constituciones

Autonomías

Junio 2015

Número de habitantes por sociedad constituida



AUTONOMÍA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
ANDALUCÍA	1,487	2	1,700,000	1,550,000	1,462	29,323	29,323	3	56,367	56,367
ARAGÓN	148	1	399,200	399,200	147	17,134	17,134	0		
ASTURIAS	122	1	60,000	60,000	121	21,846	21,846	0		
BALEARES	288	1	60,000	15,000	285	21,013	21,013	0		
CANARIAS	317	0			317	25,685	25,685	0		
CANTABRIA	79	0			79	59,185	59,185	0		
CASTILLA-LEÓN	236	1	60,000	15,000	234	36,470	36,470	0		
CASTILLA-LA MANCHA	284	1	60,000	15,000	282	29,049	29,049	1	6,000	6,000
CATALUÑA	1,664	8	468,750	440,625	1,532	19,415	19,415	14	31,579	3,007
CEUTA Y MELILLA	21	0			21	7,148	7,148	0		
COMUN. VALENCIANA	863	2	80,000	80,000	948	26,478	26,478	3	1,667	1,667
EXTREMADURA	97	0			97	50,635	50,635	0		
GALICIA	362	1	60,000	60,000	348	35,501	35,501	3	867	867
MADRID	1,799	44	2,711,364	2,692,955	1,744	43,564	43,564	11	7,502	3,411
MURCIA	281	1	60,000	60,000	260	40,707	40,707	0		
NAVARRA	86	1	90,000	90,000	94	8,488	8,488	0		
PAIS VASCO	288	1	66,000	51,480	267	43,925	43,925	0		
LA RIOJA	28	1	400,000	400,000	28	68,112	68,112	0		

Constituciones

Provincias

Junio 2015

PROVINCIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
ALAVA	42	0	0	0	42	955,574	955,574	0	0	0
ALBACETE	60	0	0	0	60	4,673,700	4,673,700	0	0	0
ALICANTE	400	0	0	0	400	5,906,000	5,906,000	0	0	0
ALMERÍA	140	0	0	0	140	4,230,599	4,230,599	0	0	0
ÁVILA	9	0	0	0	9	140,700	140,700	0	0	0
BADAJOS	68	0	0	0	68	1,693,308	1,693,308	0	0	0
BALEARES	288	1	60,000	15,000	285	5,988,724	5,988,724	0	0	0
BARCELONA	1,270	8	3,750,000	3,525,000	1,249	17,301,767	17,301,767	13	442,100	42,100
BURGOS	40	0	0	0	40	863,620	863,620	0	0	0
CÁCERES	29	0	0	0	29	3,218,252	3,218,252	0	0	0
CADIZ	160	1	3,000,000	3,000,000	149	3,834,173	3,834,173	0	0	0
CASTELLÓN	90	0	0	0	89	4,987,400	4,987,400	1	3,000	3,000
CIUDAD REAL	66	0	0	0	66	1,472,439	1,472,439	0	0	0
CORDOBA	101	0	0	0	101	4,018,765	4,018,765	0	0	0
LA CORUÑA	143	0	0	0	140	7,092,033	7,092,033	3	2,600	2,600
CUENCA	23	1	60,000	15,000	22	290,166	290,166	0	0	0
GERONA	128	0	0	0	127	6,662,723	6,662,723	1	0	0
GRANADA	124	0	0	0	123	1,065,752	1,065,752	1	130,000	130,000
GUADALAJARA	34	0	0	0	34	325,780	325,780	0	0	0
GUIPUZCOA	78	0	0	0	76	8,086,187	8,086,187	0	0	0
HUELVA	73	0	0	0	73	1,381,441	1,381,441	0	0	0
HUESCA	31	0	0	0	31	1,134,321	1,134,321	0	0	0
JAÉN	68	0	0	0	66	2,342,878	2,342,878	2	39,100	39,100
LEÓN	48	0	0	0	46	5,744,692	5,744,692	0	0	0
LERIDA	64	0	0	0	64	3,576,437	3,576,437	0	0	0
LA RIOJA	28	1	400,000	400,000	28	1,907,146	1,907,146	0	0	0

Constituciones

Provincias

Junio 2015

PROVINCIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
LUGO	26	0	0	0	25	244,356	244,356	0	0	0
MADRID	1,799	44	119,300,030	118,490,015	1,744	75,975,392	75,975,392	11	82,520	37,520
MÁLAGA	516	0	0	0	515	9,470,725	9,470,725	0	0	0
MURCIA	281	1	60,000	60,000	260	10,583,816	10,583,816	0	0	0
NAVARRA	86	1	90,000	90,000	94	797,895	797,895	0	0	0
ORENSE	48	0	0	0	46	378,511	378,511	0	0	0
ASTURIAS	122	1	60,000	60,000	121	2,643,409	2,643,409	0	0	0
PALENCIA	8	0	0	0	8	131,200	131,200	0	0	0

22/8/2015

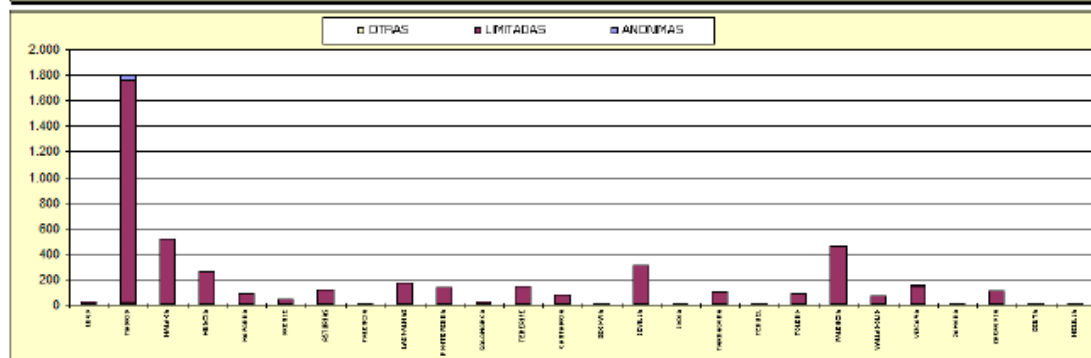
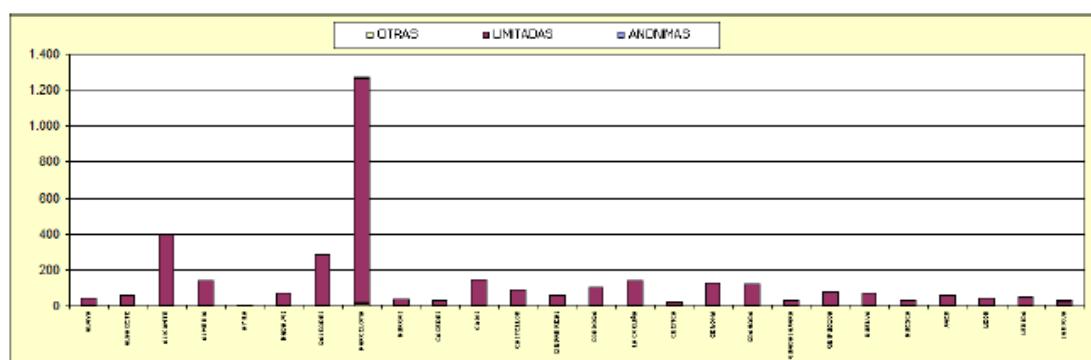
<https://www.registradores.org/estaticasm/Estadística/2015/junio/paginas/constituciones.htm>

LAS PALMAS	188	0	0	0	169	5.314.445	5.314.445	0	0	0
PONTEVEDRA	138	1	60.000	60.000	137	4.639.584	4.639.584	0	0	0
SALAMANCA	90	0	0	0	30	317.536	317.536	0	0	0
TENERIFE	148	0	0	0	148	2.827.593	2.827.593	0	0	0
CANTABRIA	79	0	0	0	79	4.675.636	4.675.636	0	0	0
BEGOVIA	10	0	0	0	10	337.626	337.626	0	0	0
SEVILLA	308	1	400.000	100.000	305	16.526.253	16.526.253	0	0	0
SORIA	7	0	0	0	7	23.206	23.206	0	0	0
TARRAGONA	102	0	0	0	102	2.202.194	2.202.194	0	0	0
TERUEL	8	1	399.200	399.200	8	466.516	466.516	0	0	0
TOLEDO	91	0	0	0	90	848.882	848.882	1	6.000	6.000
VALENCIA	483	2	160.000	160.000	459	14.207.868	14.207.868	2	2.000	2.000
VALLADOLID	72	0	0	0	72	893.745	893.745	0	0	0
VIZCAYA	160	1	66.000	51.480	149	2.686.195	2.686.195	0	0	0
ZAMORA	19	1	60.000	15.000	12	81.640	81.640	0	0	0
ZARAGOZA	108	0	0	0	108	917.851	917.851	0	0	0
CEUTA	12	0	0	0	12	67.018	67.018	0	0	0
MELILLA	8	0	0	0	9	83.100	83.100	0	0	0
TOTALES	8.347	88	127.925.230	128.440.886	8.248	268.238.769	268.238.769	36	707.320	282.220

Constituciones

Provincias

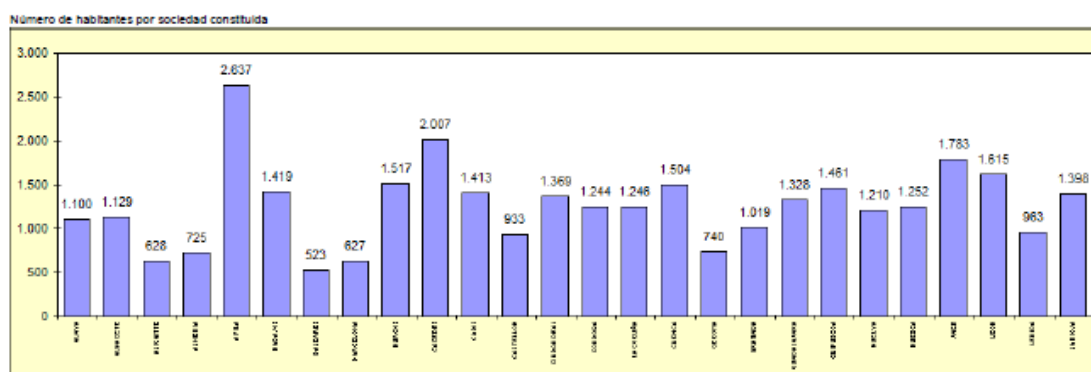
Junio 2015



Constituciones

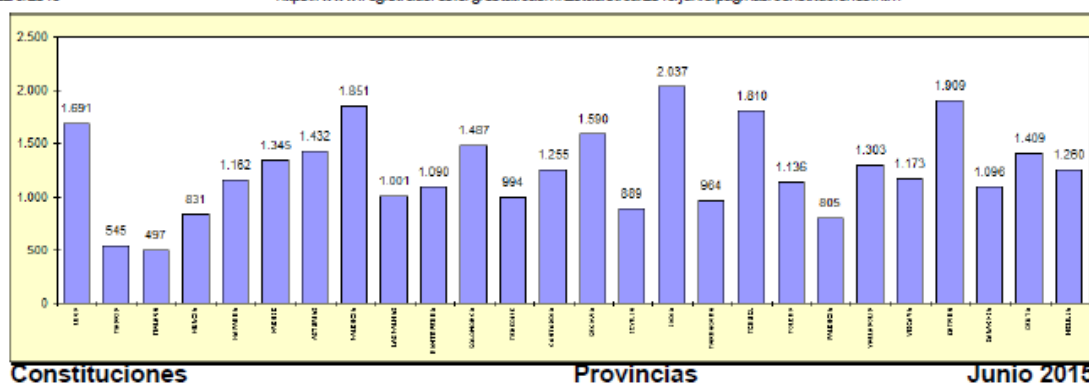
Provincias

Junio 2015



<https://www.registradores.org/estaticasm/Estadistica/2015/junio/paginas/constituciones.htm>

4/8



Constituciones

Provincias

Junio 2015

Media de capitales en constituciones (euros)

PROVINCIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
ALAVA	42	0			42	22.752	22.752	0		
ALBACETE	80	0			80	77.895	77.895	0		
ALICANTE	400	0			400	14.765	14.765	0		
ALMERIA	140	0			140	30.219	30.219	0		
AVILA	9	0			9	15.633	15.633	0		
BADAJOZ	88	0			88	24.902	24.902	0		
BALEARES	286	1	60.000	15.000	285	21.013	21.013	0		
BARCELONA	1.270	8	468.750	440.625	1.249	13.852	13.852	13	34.008	3.238
BURGOS	40	0			40	21.591	21.591	0		
CACERES	29	0			29	110.974	110.974	0		
CADIZ	160	1	3.000.000	3.000.000	149	25.733	25.733	0		
CASTELLON	90	0			89	56.038	56.038	1	3.000	3.000
CIUDAD REAL	68	0			66	26.294	26.294	0		
CORDOBA	101	0			101	39.790	39.790	0		
LA CORUÑA	143	0			140	50.657	50.657	3	867	867
CUENCA	29	1	60.000	15.000	22	13.189	13.189	0		
GERONA	128	0			127	52.462	52.462	1	0	
GRANADA	124	0			123	8.665	8.665	1	130.000	130.000
GUADALAJARA	34	0			34	9.582	9.582	0		
GUIPUZCOA	76	0			76	106.397	106.397	0		
HUELVA	73	0			73	18.924	18.924	0		
HUESCA	31	0			31	36.591	36.591	0		
JAEN	68	0			56	41.837	41.837	2	19.550	19.550
LEON	46	0			46	124.885	124.885	0		
LERIDA	64	0			54	66.230	66.230	0		
LA RIOJA	28	1	400.000	400.000	28	68.112	68.112	0		

Constituciones

Provincias

Junio 2015

PROVINCIA	Totales	ANONIMAS			LIMITADAS			OTRAS		
		Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado	Número	Suscrito	Desembolsado
LUGO	26	0			25	9.774	9.774	0		
MADRID	1.798	44	2.711.364	2.692.955	1.744	43.564	43.564	11	7.502	3.411
MALAGA	616	0			515	18.390	18.390	0		
MURCIA	281	1	60.000	60.000	260	40.707	40.707	0		
NAVARRA	96	1	90.000	90.000	94	8.488	8.488	0		
ORENSE	48	0			46	8.229	8.229	0		
ASTURIAS	122	1	60.000	60.000	121	21.846	21.846	0		
PALENCIA	8	0			8	16.400	16.400	0		
LAS PALMAS	169	0			169	31.446	31.446	0		
PONTEVEDRA	138	1	60.000	60.000	137	33.866	33.866	0		
SALAMANCA	30	0			30	10.585	10.585	0		
TENERIFE	148	0			148	19.105	19.105	0		
CANTABRIA	79	0			79	59.185	59.185	0		
SEGOVIA	10	0			10	33.763	33.763	0		
SEVILLA	308	1	400.000	100.000	305	54.184	54.184	0		
SORIA	7	0			7	3.315	3.315	0		
TARRAGONA	102	0			102	21.590	21.590	0		
TERUEL	9	1	399.200	399.200	8	58.315	58.315	0		
TOLEDO	81	0			80	9.432	9.432	1	6.000	6.000
VALENCIA	489	2	80.000	80.000	489	30.954	30.954	2	1.000	1.000
VALLADOLID	72	0			72	12.413	12.413	0		
VIZCAYA	160	1	66.000	51.480	149	18.028	18.028	0		
ZAMORA	13	1	60.000	15.000	12	6.803	6.803	0		

22/9/2015

<https://www.registradores.org/estaticasm/Estadística/2015/junio/paginas/constituciones.htm>

ZARAGOZA	108	0	108	8.499	8.499	0
CEUTA	12	0	12	5.585	5.585	0
MELILLA	8	0	9	9.233	9.233	0

Constituciones. Otras formas sociales**Nacional****Junio 2015**

Número de constituciones por forma social

Otras formas sociales

Forma Social	Número
Sociedad Colectiva	4
Sociedad Comanditaria	1
Cooperativa	1
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)	1
Fondos de Inversión	0
Fondo de Pensiones	0
Agrupación de Interés Económico (AIE)	8
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE)	0
Caja de Ahorros	0
Unión Temporal de Empresas (UTE)	5
Sociedad Civil	9
Otras	6
Total	35

Tipologías específicas

Forma Social	Número
Sociedad Anónima Europea	0
Sociedades Profesionales	87
Sociedades Laborales	40
Emprendedor de Responsabilidad Limitada	1
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva	24
Total	152

<https://www.registradores.org/estaticasm/Estadística/2015/junio/paginas/constituciones.htm>

6/6